

**primero
la gente**



EDICIONES CAUSA COMUN

DIEGO ARRIA

PRIMERO LA GENTE

Antes de empezar

He elegido, para este libro, la técnica del autorreportaje.

Hay preguntas que me han hecho infinidad de veces; hay preguntas que, sé, alguna gente habría querido hacerme y no me hizo; y hay, por último, preguntas que deberían haber hecho, y jamás me hicieron. Por eso, se me ocurrió que reunir esas preguntas, y responderlas, era un buen modo de clarificar mi posición ante algunos problemas fundamentales de Venezuela. Y, en efecto, esas preguntas me han permitido desarrollar mi pensamiento político y dar una adecuada idea de las soluciones que, como candidato a la Presidencia de la República, someteré a juicio de los venezolanos.

Me satisface incorporarme al proceso electoral con reflexiones y no con agravios, porque creo que el país merece el respeto de quienes aspiran a conducir su futuro, y ese respeto se ejerce reflexionando sobre nuestros problemas y estructurando soluciones.

Por cierto, estas páginas no agotan, ni mi visión de los problemas, ni las soluciones que propongo, las cuales estarán contenidas en el Programa para Gobernar a Venezuela, que presentaré a la consideración de los venezolanos. En cambio, estas páginas resumen, sí, las cuestiones básicas y los criterios que orientarán ese programa y guían mi conducta. Procuran ser, además un estímulo para la discusión de problemas vitales para la gente.

Estoy seguro de que, en el futuro, será necesario agregar, a éstas, otras preguntas; pero, en todo caso, las respuestas contenidas en este libro quedarán como la síntesis más apretada del planteamiento que formulé a mi país, expuesto aquí en el lenguaje más accesible, porque creo que el destino natural de las ideas políticas es su comprensión y difusión popular.

DIEGO ARRIA

Caracas, junio de 1978.

Introducción

El reto

¿Cómo será Venezuela dentro de cinco, diez, quince años? ¿Qué país llegará al siglo XXI?

A muchos, les cuesta pensar en estos términos. Imaginan, por ejemplo, que el siglo XXI está demasiado distante como para que tratemos de anticiparnos a él. Sin embargo, el siglo XXI está tan lejos, hacia adelante, como el 23 de enero de 1958, hacia atrás. En sólo 22 años más, habremos alcanzado el año 2000.

No sólo el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, sino también nuestro propio futuro inmediato, dependen de que empecemos a enfocar nuestros problemas desde esa perspectiva.

Venezuela tiene, ahora, una oportunidad única, de la cual no dispone ningún otro país en vías de desarrollo: ha logrado reunir la libertad política y los recursos materiales necesarios para transformar su economía y su conformación social. La mayoría de los países en vías de desarrollo carece de ambos bienes, unos pocos tienen libertad sin recursos y otros menos tienen recursos sin libertad.

Este privilegio de Venezuela es, sin embargo, un privilegio condicional: si sabemos emplearlo, construiremos una democracia moderna, desarrollaremos una estructura productiva equilibrada y difundiremos el bienestar social. Llegaremos, de ese modo, al siglo XXI como uno de los países más importantes y estables, con un mínimo de problemas y un máximo de satisfacción social.

En cambio, si dejamos que el siglo XXI nos sorprenda; si no nos ponemos a pensar y decidir ya qué país queremos; si no planificamos, si no medimos los efectos futuros de nuestras decisiones actuales; si no recurrimos a la ciencia y la técnica, en reemplazo de los prejuicios y la improvisación; si no logramos que la política, en vez de una gran casa de vecindad, sea un ámbito para el estudio de los problemas y la elaboración de respuestas eficientes, entonces corremos el serio riesgo de perderlo todo. La oportunidad, los recursos, y también la libertad.

Ese es el reto venezolano. No proviene del exterior ni está destinado a otros países. Es un reto que la realidad nos hace a nosotros mismos. Nos desafía a probar que somos acreedores a la grandeza y el bienestar; que somos capaces de hacer un país donde el poderío económico sea compatible con la equidad social; un país con autonomía, con gravitación en la escena internacional, y un país internamente satisfecho de sí mismo, caracterizado por una calidad de vida que les permita, a todos sus habitantes, vivir con dignidad.

Primero la gente

—¿Cree usted que es su actitud frente a los problemas sociales el rasgo característico de su pensamiento político? ¿Cómo se explica eso en un hombre de su situación personal?

—Soy un hombre de la clase media; pero bien podría pertenecer a la clase más alta y tener la misma preocupación social. Hay una visión escéptica de la existencia que no comparto: no pienso que el interés individual guíe todos los actos de los hombres. No creo que la justicia social sea postulada sólo por quienes nada tienen que perder. Al contrario, sostengo que frecuentemente los hombres subordinan sus intereses a sus ideales.

¿Puede alguien desear que media Caracas siga viviendo en ranchos? ¿Puede alguien desear que se le niegue a la gente el derecho a la salud o a la educación? ¿Puede alguien desear que millares de niños venezolanos vivan desamparados?

No lo creo. En cambio, sé que hay muchos dirigentes que, sencillamente, no conocen los ranchos, no han entrado nunca a un hospital o una escuela pública, ni han visto nunca a un niño abandonado. No es que esos dirigentes carezcan de sensibilidad social. Es, sencillamente, que viven en un microclima. Tienen una idea de la pobreza, pero les falta la vivencia de la pobreza.

Hay, también políticos a quienes una deformada concepción de su oficio los ha acostumbrado a ver a

la gente como engranajes de una maquinaria. Están programados para pensar, frente al problema del prójimo, la forma de convertirlo en un recurso político. El hombre que baja de los cerros y se mete en el local de un partido convencional, no es recibido como el testimonio de un problema social a resolver, sino como una pieza útil, capaz de recoger votos entre los suyos. Eso no significa que todos los políticos sean perversos o insensibles; simple y trágicamente, hay en ellos una deformación profesional. Casi una necesidad de insensibilizarse. Un hombre obligado a pensar en términos de su maquinaria, necesita —para funcionar dentro de esa misma maquinaria— hacer a un lado muchas de sus actitudes naturales.

Hay una palabra muy dura, pero muy gráfica, que usan los psicólogos: cosificar, es decir, convertir a los seres humanos en cosas. Creo que los partidos políticos, cuando se burocratizan, cuando carecen de democracia interior, terminan por cosificar a sus propios partidarios. Cada militante es un tornillo, una tuerca, una polea de la maquinaria, dedicada, por lo demás, a fabricar, no voluntades, sino votos. Esa deformación profesional perturba, luego, toda la concepción vital de los dirigentes políticos.

Por eso, creo que, a los fines de provocar una transformación en nuestras mentes y darle a la política el noble contenido que necesita y merece, es imprescindible establecer que *lo primero es la gente*.

¿Para quién trabajamos? Para la gente. ¿Con quién trabajamos? Con la gente. Y la gente tiene necesidades, aspiraciones, méritos, problemas, ideas, sentimientos. Tenemos que oír a la gente, estimularla, impulsarla y hacerla participar. Tenemos que conversar con la gente. Tenemos que reunirnos con la gente.

Claro, habrá a quienes esto le parezca retórico. Pero las actitudes, aun las que parecen excesivamente vagas, son las que cuentan en el momento de las decisiones. Cuando hay que decidir, por ejemplo, entre hacer un Palacio de Gobierno o un barrio obrero, ahí es donde cada uno pone a prueba qué es lo que más

pesa en cada quien; concretamente, el prestigio... o la gente. Y en esto tengo una larga experiencia. Yo, que no he vivido encerrado en el microclima de la bonanza, que he caminado cerros, recorrido hospitales y hablado con medio país, enfrentaba —como Gobernador— a cada instante el problema de los criterios básicos. Me ponía, siempre, del lado de la gente, y encontraba resistencias. Porque no fue fácil abrir las playas para la gente. O concentrar esfuerzos en remodelar la Maternidad, para la gente. O comprar los mejores autobuses, para la gente. A veces la insensibilidad artificial que provocan los microclimas, y a veces la deformación profesional de los políticos, hacían que mis iniciativas fueran vistas como demagógicas o pantalleras. Creo, sencillamente, que eran fruto de una actitud frente a la vida, y frente a la política, que reivindicó como la más positiva: la actitud que cede la prioridad, siempre, a la gente. Eso es, para mí, más importante que cualquier ideología. Conozco muchas personas que están enamoradas de la idea de pueblo, pero no del pueblo en sí. Y conozco muchas otras que ambicionan la grandeza de la nación, pero olvidan que la nación no existe con independencia de quienes la integran.

Todos ellos anteponen la ideología a la gente. A mi juicio, ponen el carruaje delante del caballo, y por eso están trancados; no pueden avanzar hacia la solución de los problemas fundamentales del país.

Mi lema es: primero la gente. Y creo, de verdad, que es mucho, pero mucho más que una frase. Encierra toda una definición, permite anticipar conductas futuras y explicar conductas pasadas, y refleja el humanismo que, a mi juicio, necesita la política; para vivificarse y alcanzar su pleno sentido.

El denominador común

—Entonces, ¿usted no cree que la conducta de los hombres se rija por sus intereses? ¿Niega la importancia política de las clases sociales?

—No. Creo que los intereses juegan un papel importante. Pero creo, también, que los sentimientos, los ideales, los principios éticos —que no necesariamente son un reflejo de los respectivos intereses— contribuyen a fijar las posiciones de los hombres.

Habría que adoptar un materialismo grosero para creer que todo hombre de dinero es un feroz reaccionario, porque ha podido satisfacer sus necesidades; y que todo obrero es un encendido extremista, porque tiene necesidades insatisfechas. La sociedad no es una lucha entre avaros y envidiosos. La realidad es algo mucho más complejo que un fresco de Diego Rivera, el pintor de aquellos ricachones perversos y de los explotados famélicos.

Creo que un país en construcción, como es Venezuela; un país que tiene una gran dependencia del exterior; un país que está obligado a utilizar rápidamente y bien su riqueza percedera, tiene la necesidad de buscar entre sus distintas clases, no las diferencias, sino el mínimo común denominador.

No es una tarea difícil, porque —en contra de lo que suponen los ideólogos más obstinados— los distintos sectores sociales no son sistemáticamente antagónicos.

Es muy simplista suponer que a los empresarios les conviene un sector obrero de baja remuneración. Eso significa, poco menos que automáticamente, baja productividad y, además, un mercado interno muy débil, porque si la mayoría es de escasos recursos, hay pocas posibilidades de desarrollar industrias y otras actividades económicas que requieren un gran mercado interno. No hay gran industria en un país pobre. No hay gran empresa con salarios bajos.

Estamos llegando a un punto muy importante: yo no sólo creo que los ideales y sentimientos guían a los hombres tanto o más que sus intereses; creo, asimismo, que los intereses de los distintos sectores sociales no son siempre incompatibles. Pueden, y deben, ser armonizados.

Tomemos un ejemplo: ¿les conviene a los obreros estar organizados, tener sindicatos fuertes y disponer de una central obrera que discuta en pie de igualdad con los empresarios y con el Estado? Sí, naturalmente que les conviene.

Pero también les conviene a los empresarios. Porque estos necesitan interlocutores válidos para celebrar acuerdos en firme y evitar la anarquía en las relaciones con los trabajadores. Si no hay una organización obrera fuerte y representativa, cada fábrica es un campo de discusión y toda la actividad económica está sujeta a la presión de las reivindicaciones constantes. Un sindicalismo fuerte les permite, a los empresarios, disponer de reglas de juego más claras, organizar la producción más racionalmente y evitar el riesgo del usufructo político que muchos sectores hacen de las reivindicaciones obreras.

Una mentalidad simplista diría: ¿cómo es posible que una misma cosa beneficie, al mismo tiempo, a los obreros y a los empresarios? Y sí, es posible. Si no lo fuera, si los intereses sociales no fueran armonizables, y en muchos aspectos concurrentes, no habría sociedad estable en el mundo entero.

¿Qué intereses hay que armonizar?, y ¿cuáles son los comunes denominadores?: eso es lo que debe bus-

car quien aspire a la Presidencia de Venezuela y a fomentar el progreso racional de nuestra sociedad. Hay que sentar las bases de una alianza de sectores, en favor de un objetivo común, que en una comunidad nacional no puede ser otro que el desarrollo de esa comunidad como tal. Lo que es bueno para el conjunto es, en primera o en última instancia, bueno para el individuo.

Hay que desoxidar muchos cerebros para que estas ideas prosperen. Pero es necesaria esta prédica anticorrosiva si realmente queremos el avance de Venezuela.

La política

—Usted ingresó al poder por la puerta grande. No hizo la gimnasia de la política que la mayoría de los líderes de nuestro país ha hecho. Nunca estuvo preso, ni fue torturado, ni sufrió el destierro. ¿Es eso una ventaja o una desventaja?

—Es, sin duda, una ventaja; de la que disfrutamos todos los dirigentes jóvenes. Somos beneficiarios, precisamente, del sacrificio de hombres que sufrieron la cárcel, la tortura y el destierro de otros tiempos, para que nuevas generaciones de venezolanos tuvieran otras perspectivas y pudieran capacitarse para mejor servir al país.

Nosotros tenemos una deuda de gratitud con esa gente. Pero la gratitud no nos puede llevar a que distorsionemos los valores. El heroísmo era necesario para combatir a una dictadura; pero no es afortunadamente necesario —y resulta del todo insuficiente— para dirigir un Estado moderno.

Del mismo modo, la gimnasia partidista previa tampoco es requisito y, más bien, puede ser un obstáculo. Desafortunadamente, la política ha sido, en Venezuela, una práctica poco edificante. El tiempo que los dirigentes partidistas han tenido que dedicar a las rencillas internas, a los duelos verbales con sus colegas de otros partidos y a construir, mantener y reparar permanentemente lo que ellos llaman "la maquinaria", ha sido tiempo sustraído al estudio, a la investigación y al trabajo constructivo.

Yo no arrastro rencores de presidio ni odios de partido. Tampoco tengo la frustración del tiempo perdido. A los cuarenta años, puedo exhibir antecedentes que, creo, me habilitan para proponerle a Venezuela, no una pugna entre verde y blanco, sino un proyecto nacional.

No tengo temor a hablar de mí mismo. Sostengo que exhibir las experiencias propias es un deber cuando se aspira a conducir el destino nacional.

Durante ocho años, tuve la ocasión de ocupar posiciones de responsabilidad en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual me permitió conocer íntimamente ése y otros organismos internacionales; conocer en profundidad a gobernantes de los países más dispares y comprobar, en la práctica, el funcionamiento de las economías nacionales, a las que yo había dedicado buena parte de los estudios universitarios de Ciencias Políticas, Economía y Administración de Empresas. Como Sub-Director de Operaciones del B.I.D., para México, Centroamérica y el Caribe, y como representante del Banco ante el Mercado Común Centroamericano, me correspondió evaluar un sinnúmero de proyectos industriales, educacionales, de infraestructura y de desarrollo urbano. Como experiencia adicional, el hecho de tener, durante años, mi centro de operaciones en Washington, y la relación que —en virtud de mis cargos— mantenía con las autoridades de los Estados Unidos, me dieron la oportunidad de conocer el funcionamiento del gobierno y del país más poderoso de la Tierra, cuyas decisiones inciden tan notablemente —para bien o para mal— en la suerte de los países latinoamericanos.

Durante mi estada en el exterior, pude realizar también la interesante experiencia de ser Profesor visitante en la Universidad de Carolina del Norte, y de colaborar en las ediciones anuales de la Enciclopedia Británica. A mi regreso a Venezuela pasé a desempeñar funciones exclusivamente técnicas. El gobierno del Presidente Caldera, en efecto, me confió el manejo del turismo —una industria poten-

cialmente muy rica en Venezuela, pero tradicionalmente desestimada— y pude construir una Corporación de Turismo tan dinámica que me valió la consideración pública.

Más tarde, y aunque nunca me incorporé a partido político alguno, tuve participación, activa e importante, en la campaña presidencial de 1973. Como fundador y director de un movimiento de opinión, que también figura en mi *haber*, apoyé la candidatura de Carlos Andrés Pérez y, en esa oportunidad, resulté electo Diputado al Congreso Nacional por el Estado Miranda.

En el gobierno del Presidente Pérez, fui Gobernador del Distrito Federal y, simultáneamente, Presidente del Centro Simón Bolívar, lo cual me permitió manejar en forma directa los problemas de los venezolanos que viven en el sistema nervioso central de Venezuela. Viviendas, salud pública, educación, transporte... las cuestiones más íntimamente ligadas con la calidad de la vida, estuvieron en gran parte, en mis manos.

Por último, fui Ministro, y de una rama que, por su naturaleza, tiene que ver con todo el aparato estatal. En efecto, manejé la información pública. La tarea de poner en conocimiento del ciudadano común, explicar y hacer comprender el sentido de cada decisión del Estado, así como la tarea de transmitir al gobierno las inquietudes, aspiraciones y críticas de los gobernados, me dieron una visión global de los problemas. Asimismo, tuve el control directo de los medios de comunicación social del Estado, y la necesidad funcional de tratar con todos los otros medios de comunicación social, lo cual me puso en contacto con uno de los mayores poderes que, fuera del Estado, se ejercen en nuestra sociedad.

A lo largo de esta fructífera experiencia, tanto en el campo internacional como en el campo nacional, conocí en forma personal a los personajes principales de la actividad política, económica y social del continente americano; particularmente, a través de mi

actividad en el seno del Estado, tuve la oportunidad única de conocer por dentro a nuestros dos partidos políticos. He vivido las interioridades de la política local. Y he tratado con los empresarios, los trabajadores; las clases más y menos favorecidas. Recorrí el país palmo a palmo, e ingresé a todos los ámbitos, desde el Country Club hasta los cerros y los barrios.

Después de todo esto, tengo motivos para estar satisfecho de no haberme demorado en ociosas gimnasias partidistas, que me habrían impedido esta capacitación intensiva que, sobre el manejo del Estado, he hecho durante más de quince años; y me habrían afectado, seguramente, la capacidad de analizar los asuntos públicos con imparcialidad y ponderación.

Los partidos

—¿No es significativo que usted censure a los partidos después de haber tenido la oportunidad, muy rara en Venezuela, de integrar, sucesivamente, los gobiernos de los dos viejos partidos nacionales?

—Esa circunstancia es, precisamente, la que me da autoridad para formular críticas a esos partidos. Si bien nunca estuve inscrito en ninguno de ellos, porque me he mantenido siempre como independiente, desde la función pública he tenido la oportunidad de conocerlos íntimamente.

Tengo el orgullo de haber cooperado con los dos presidentes de mayor brillo que ha dado la democracia venezolana: Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Trabajando con ellos como independiente, he sido testigo de la soledad que, en muchas ocasiones, ambos han experimentado en el poder. No exactamente porque sus respectivos partidos los abandonaran, sino porque no estaban a su misma altura. Esto fue, para mí, especialmente notorio en el caso de Carlos Andrés ya que con él trabajé mucho más estrechamente que con Caldera.

Carlos Andrés Pérez es un estadista, un hombre con una clara visión del mundo exterior y de las interrelaciones que nos unen a ese mundo. Su propósito fue redimensionar a Venezuela y conferirle, en el ámbito internacional, una personalidad mucho más decisiva y vigorosa. Pero, mientras él pretendía anticiparse a 1990, su partido parecía demorado en 1960.

Tanto el Presidente Pérez como el Presidente Caldera habrían superado sus propios gobiernos si hubiesen tenido detrás de sí a organizaciones políticas nuevas, ágiles, libres de rencores y preconcepciones. Pero ocurrió que, mientras ellos, individualmente, se adaptaron a la nueva dimensión de Venezuela, sus partidos no advirtieron los cambios cualitativos que —como efecto de las variaciones sufridas por la economía mundial del petróleo y una coyuntura internacional propicia— se han producido durante los últimos años en nuestro país.

Personalmente, experimenté varias veces un sentimiento de frustración cuando, cooperando con el presidente Pérez en el intento de diseñar un país nuevo, veía entorpecida mi propia labor, y la del Presidente, por planteamientos aldeanos, críticas estrechas y mezquindades.

La mayor resonancia que logró el gobierno de Carlos Andrés Pérez, obedeció al aporte de los independientes, y de los adecos situados fuera de la maquinaria, que él convocó; y, por cierto, su partido cuestionó siempre ese aporte. No supo valorarlo. Para Acción Democrática —como para COPEI— el valor supremo es la pertenencia al partido. Yo, que políticamente jamás fui bautizado, ni como adeco ni como copeyano, debí soportar fuertes presiones, en el gobierno de Caldera y, sobre todo, en el de Carlos Andrés Pérez. Ciertos dirigentes adecos, por ejemplo, no aceptaron nunca que un hombre ajeno al partido fuera el gobernador de Caracas. No entendieron, tampoco, que el Ministerio de Información y Turismo (el cual, entre otras cosas, maneja la publicidad del Estado y los medios estatales de comunicación social) fuera confiado a un hombre que no se guiaba por criterios partidistas ni se sentía obligado a usar el poder en beneficio del partido.

Ahora bien, no creo que los vicios propios de AD y COPEI sean esenciales a los partidos políticos. Creo que son un producto histórico. Esos partidos arrastran consigo una serie de tradiciones, hábitos, estilos, que

vienen de otra época —totalmente diferente a la nuestra— y que le han impedido adaptarse a la nueva realidad del país. Ha habido un desfase demasiado sensible entre el ritmo de crecimiento de Venezuela y las facultades de adaptación de esos partidos, tan trabados en su accionar por aquellos lastres del pasado.

Eso no significa que los partidos políticos sean, inevitablemente, organizaciones rígidas, incapaces de cambiar al mismo ritmo que el país. Creo, por ejemplo que AD y COPEI podrían, fuera del gobierno, revitalizarse, renovar sus cuadros y sus métodos. Pero sostengo que un gran movimiento independiente, en el que participe esa mayoría que no se siente representada por los dos viejos partidos, puede y debe dar origen a un concepto nuevo de partido: eficaz, flexible, dinámico, inserto en la realidad contemporánea.

Las maquinarias

—¿No cree que, más allá de los vicios de uno y otro partido, el país es adeco y copeyano?

—No. Lo que pasa es que, en el momento de la elección, la gente escoge entre quienes tienen opción de triunfo. Salvo los afiliados de pequeños partidos ortodoxos, cuyo voto tiene el sentido de una afirmación doctrinaria, la mayoría sopesa las ventajas y desventajas de los candidatos que tienen posibilidad de convertirse en Presidente de la República. En muchos casos, la elección se reduce a optar por el mal menor.

Por razones históricas, AD y COPEI son los partidos más extendidos y, hasta ahora, han sido los depositarios de esas posibilidades.

Ahora bien, una cosa es que, por no perder su voto, la gente se haya decidido siempre por AD o COPEI, y otra cosa bien distinta es que esa gente sea adeca y copeyana. Las encuestas de opinión pública demuestran que, al contrario, la mayoría del país es independiente. Esa mayoría se ve, cada cinco años, obligada a jugar a "blanco o verde". Pero luego, durante los cinco años siguientes, no está identificada con los procedimientos, los prejuicios y las obsesiones de los partidos tradicionales.

¿Por qué no se han desarrollado nuevas alternativas?

Bueno, han surgido otros partidos, pero casi todos han sido desprendimientos de los anteriores. Como or-

ganismos unicelulares, los viejos partidos —y, sobre todo, Acción Democrática— se han reproducido separando una parte de sí mismos. Esa no era una alternativa para un país que quería fuerzas biológicamente distintas.

Los independientes nunca se han organizado de forma estable. Hubo, sí, candidatos independientes. Algunos consiguieron el apoyo de gente que —sólo para testimoniar su desagrado con los partidos tradicionales— estaba dispuesta a votar a un candidato simbólico. Pero ninguno de esos candidatos —algunos de ellos muy valiosos— pudo cumplir sus legítimas aspiraciones de originar una fuerza permanente.

Un movimiento independiente, que no sea expresión de oportunismo y que no se defina como *anti*-adeco o *anti*-copeyano (porque plantear las cosas en esos términos es concederles a AD y COPEI que sigan marcándole los pasos a un país que los ha desbordado), es un movimiento destinado a enraizarse en la sociedad venezolana. Eso es lo que aún no ha tenido Venezuela. Nunca hubo independientes organizados, con una propuesta propia y proyección de futuro.

Más allá del hecho circunstancial de una elección, propongo la formación de esa fuerza, que convoque a los más eficaces, a los más capaces, a los más esforzados, a participar activamente en la construcción de una Venezuela mejor. Porque el movimiento que auspicio no es una “bolsa de trabajo” ni va a dar a sus afiliados patente de corso para violar leyes y sacar ventajas. Aspiro a constituir una fuerza permanente, basada en el sentido de responsabilidad, la capacidad de trabajo y la vocación de servicio al país.

La llamo “movimiento” para hacer gráfica la distinción con los partidos políticos actuales, que están estructurados sobre criterios completamente distintos. Eso no significa que, en mi criterio, los partidos políticos, por el hecho de serlo, resulten negativos. No ataco a la institución sino a las distorsiones que, en nuestro medio, la han desnaturalizado. Si, en el futuro, la fuerza que vamos a constituir —guiada por

el ideal de una Venezuela mejor— se establece definitivamente como partido político, por eso no perderá las cualidades que van a distinguirla de esas estructuras tradicionales, enviciadas e ineficientes, que han desprestigiado circunstancialmente el concepto de partido. En definitiva, nuestra aspiración es edificar una organización política —la denominación no importa— donde el militante no sea un número, donde cada quien conserve su personalidad, donde el derecho a disentir esté asegurado, donde la disciplina no sea la mordaza de los dirigentes para acallar cualquier discrepancia, donde se escuche a la gente. Se trata de desterrar eso que los viejos partidos llaman “la maquinaria”, y que es revelador de la imagen que esos viejos partidos tienen de sus militantes, vistos como ejes, como tuercas, como meras piezas de una máquina.

Lo que ocurre dentro de una organización política es una muestra de lo que esa organización política puede ofrecerle a la comunidad. Un partido donde todos tienen que inclinarse ante el caudillo, no puede ofrecer una verdadera democracia, pues es incapaz de realizarla, ni siquiera, en el ámbito reducido de su propio mundo interior.

Para que, en verdad, sea el instrumento necesario que dote a Venezuela de una democracia abierta, perfeccionada, superior, nuestro movimiento empezará por imponer la democracia en sí mismo. Para lograr que en Venezuela la gente tenga prioridad sobre cualquier otra consideración, empezaremos por hacer que, dentro de nuestro propio movimiento, primero sea la gente.

La opinión pública

—Usted concede gran importancia a las encuestas. En su Gobernación, además, organizó audiencias populares y, como Ministro, invitó a la ciudadanía para que le escribiera. ¿No cree que un líder político debe tener ideas propias y responder menos de lo que, a cada instante y sobre cada tema, piensen los demás?

—Un líder político debe tener, por cierto, ideas propias y firmes. Pero no puede olvidar en ningún momento que él es sólo un intérprete, y que, por lo tanto, tiene la obligación de someter constantemente esas ideas al juicio de sus representados.

Debemos distinguir entre el líder de una democracia moderna y el caudillo, que es la figura propia de las autocracias.

El caudillo se resiste a depender de lo que, sobre cada tema, opinen sus súbditos. El "sabe" lo que quiere la gente. El "no necesita" encargar encuestas, oír quejas ni leer cartas. En definitiva, el caudillo aspira a que "su" voluntad sea considerada como la voluntad del conjunto; y, naturalmente, rechaza toda posibilidad de confrontar sus opiniones con las de la mayoría.

La democracia no puede agotarse en el acto de escoger una papeleta, una vez cada cinco años. Hay que encontrar los modos de sustituir, en el siglo XX, la Asamblea ateniense. Hay que buscar las técnicas que les permitan, a los gobernados, gobernar. Participar. Hacer saber sus opiniones sobre cada problema común.

Esto, naturalmente, choca con la concepción que comúnmente tienen nuestros políticos. Ellos están dispuestos a respetar toda la liturgia de la democracia (elecciones, sesiones parlamentarias, debates entre los mismos políticos) pero le escamotean al sistema democrático lo que, a mi juicio, constituye su esencia. Porque, para ellos, primero es el partido. O el jefe del partido. O el gobierno del partido. Y yo creo que primero es la gente.

Hay quienes dicen: "Las grandes decisiones del Estado no las puede tomar la liceísta, el pitcher, el hombre que maneja un tractor". En realidad, las grandes decisiones del Estado debe tomarlas el gobernante, reflejando el sentir de la sociedad; que no es una entelequia, sino una suma de voluntades. Incluidas, por cierto, las de la liceísta, el pitcher y el hombre que maneja un tractor.

Si uno aspira a servir a la sociedad, y no a imponerse, está obligado a consultar esas opiniones, recurriendo a todos los métodos que, para auscultar la opinión pública, ofrece la técnica moderna.

El gobernante, claro, no es un sujeto pasivo, que necesita esperar el resultado de una encuesta para saber qué hacer. El, si tiene ideas congruentes y bien asentadas, se anticipa a la opinión pública, e influye sobre ella. Lo que no puede hacer es ignorarla. Porque, en una verdadera democracia, gobernante y gobernado deben estar en permanente interacción. La elección de presidente de la República no es un cheque en blanco que firma la gente. Es un mandato que, como tal, debe estar sujeto al juicio de quienes lo otorgan.

En Venezuela, largos años de autocracia han dejado su marca, y lo que consideramos democracia no lo ha sido, hasta ahora, en plenitud. Ha habido una tendencia, natural, a sustituir la voluntad de un dictador por la voluntad de un partido, lo cual en su momento constituyó un avance significativo, sobre todo teniendo en cuenta que el pueblo recibió la oportunidad de escoger, para períodos fijos, a uno entre varias gobernantes posibles.

Pero eso ya no puede conformarnos. No debemos quedarnos en la "partidocracia". Los venezolanos hemos adquirido cultura política, la libertad ha ensanchado nuestros horizontes, y hoy en día no admitimos que se nos diga: "usted elija a este partido o a aquél y luego váyase a trabajar, no se ocupe más de nada, y espere a que lo llamemos a elegir de nuevo de aquí en cinco años".

La búsqueda de una democracia abierta donde, en efecto, primero sea la gente, exige que el gobernante tenga un celo especial en percibir a cada instante las inquietudes, los anhelos, y también las críticas de la opinión pública. Antes que un signo de debilidad, eso es una demostración de fortaleza. Porque solamente quien está seguro de sus ideas, y sabe que es un fiel exponente del sentir colectivo, está dispuesto y en condiciones de someterse continuamente a la confrontación de esas ideas con la opinión de la gente.

Los medios de comunicación social

—¿Qué importancia le asigna usted a los medios de comunicación social?

—He dicho antes de ahora que los medios de comunicación social son los partidos políticos de nuestro tiempo. Ellos crean conciencia y movilizan a la gente. Se lo propongan o no, fijan objetivos sociales, ideas y hábitos. Además, contribuyen a la consolidación del sistema democrático.

Un atributo de la democracia es la posibilidad de elección. El hombre común escoge —en un sistema democrático— no sólo a sus gobernantes. Escoge ideas. Escoge su profesión. Escoge el tipo de educación que quiere dar a sus hijos. Escoge, en fin, su destino individual. Pero, ¿en qué consiste el acto de escoger sino en seleccionar una de dos o más alternativas? Escoger presupone, por lo tanto, conocer; disponer de la información necesaria para evaluar primero y efectuar, luego, esa selección.

Por eso, la información es indispensable en la democracia. Por eso, las dictaduras procuran destruir los canales de información, cercenando la libertad de prensa, ilegalizando las organizaciones políticas y sometiendo a los ciudadanos a la propaganda. Cuando no hay diversidad de fuentes, cuando falta la posibilidad de comparación, no puede hablarse de "información". De ahí la importancia que les asigno a los medios privados de comunicación social.

Hay gente que, atormentada por esos fantasmas que a muchos les roban la confianza en sí mismos, teme a

la influencia exagerada de estos medios. Su razonamiento es simple: si ellos tienen, como hemos dicho, la posibilidad de fijar objetivos sociales y si, además, son los que le proporcionan al público las alternativas entre las que éste ha de escoger desde un gobierno hasta su propio destino, ¿cómo dejar semejantes poderes en manos de unos pocos particulares?

En primer lugar, no postulo el monopolio privado de esos medios. Creo que una sociedad pluralista, donde el desacuerdo es siempre legítimo, necesita que los particulares dispongan de múltiples canales de expresión; pero creo, asimismo, que el monopolio privado de información es tan incompatible con la democracia como el monopolio estatal. La sociedad necesita que, de forma concurrente, el Estado —que representa los intereses de la sociedad en su conjunto— comprenda que informar es, para él, no un derecho sino una obligación. Y en Venezuela, el Estado dispone de los canales necesarios para cumplir con ese deber, sirviendo, además, de contrapeso a los medios privados.

Yo puedo plantearles esto a esos medios privados, en la seguridad de no ser mal entendido. Ellos han hecho conmigo una experiencia recíprocamente provechosa, durante el tiempo que fui Ministro de Información y Turismo y, por lo tanto, manéjé la información gubernamental, las radios y las televisoras estatales, y toda la publicidad del Estado.

En ejercicio de esas funciones —que nunca fueron dirigidas en contra del sector privado— concebí, como modo de sistematizar la información pública, un noticiero radial que iba a emitir mi Ministerio. Pero, ante la sola posibilidad de que ese noticiero fuera usufructuado políticamente —posibilidad que desde luego, estaba reñida con mi intención— desistí de mi proyecto y dije públicamente que lo retiraba tanto por las críticas que la oposición había formulado como por los entusiasmos que ese proyecto había despertado entre los sectores oficialistas.

Más de una vez señalé, como Ministro, que yo nunca iba a confundir información con propaganda

política, y una serie de actos —que culminaron con mi alejamiento del cargo— sirvieron para demostrar a qué extremos estaba dispuesto a cumplir mi palabra.

Con la autoridad que me dan esos antecedentes, me considero en aptitud para proponer a los medios privados una acción coordinada con el Estado. Me siento en condiciones de convocarlos a participar, también ellos, en la construcción de la nueva Venezuela.

Este es, también, un problema de concertación. No se trata de emitir decretos, poniendo trabas al desenvolvimiento de los medios privados. Si estamos de acuerdo que esos medios son esenciales para la preservación del pluralismo y el desarrollo de la democracia; si, por otra parte, conocemos su eficacia en la formación de valores y sabemos que es precisamente en el campo de los valores donde debemos librar una de las batallas más arduas en favor de la transformación, entonces lo sensato, lo constructivo, lo útil, es buscar —a través del diálogo— la forma de incorporar a esos medios al proceso que auspiciamos.

Cualquier otra actitud, equivale al insensato concepto de “abajo las neveras” que lucían en sus pancartas algunos rebeldes europeos de la década del 60. ¿Quién puede estar a favor de la putrefacción de los alimentos? Nadie. Si la nevera es el símbolo de una sociedad deshumanizada, lo que debemos hacer es humanizar a la sociedad. Si los medios de comunicación son el símbolo de una sociedad con una escala de valores distorsionada, corrijamos esa situación, convocando para esa tarea a los propios medios, y no pretendamos acabar con los medios. ¿Es ésta la actitud normal de los políticos? ¿Se han preocupado los partidos de concertar con esos medios políticas de comunicación? ¿Han recibido los medios incentivos, apoyos, estímulos destinados a revalorizar sus contenidos? Más bien, políticos y gobernantes han visto a los medios de comunicación social como meros instrumentos, por lo demás circunstanciales, de sus campañas proselitistas y su promoción personal. Y quienes se han preocupado del tema, lo han hecho con la actitud destructiva de

quien censura a nuestra radio, a nuestra televisión, a nuestra prensa, sin formular una propuesta que comprenda a esos medios y los incorpore a una tarea común.

También en esta materia tengo una experiencia personal: durante los meses que ejercí el Ministerio de Información y Turismo, sufrí el contraste entre los criterios partidistas y la concepción pluralista, abierta, que me propuse llevar adelante.

La escala de valores

—En muchas oportunidades usted ha dicho que, para construir la nueva Venezuela, se necesita una nueva escala de valores. ¿Qué significa eso?

—Los grandes motores de la acción humana, son los valores; es decir, aquellas conductas o metas que la sociedad establece como deseables o enaltecedoras.

Alguna gente, muy esquemática, piensa que el hombre se mueve sólo en función de sus intereses materiales. Sin embargo, esos intereses ceden ante otros, como el patriotismo, que la sociedad considera supremos. Y, por el contrario, aun después de saciados hasta la saturación los intereses materiales, los individuos siguen movilizándose para progresar en sociedades donde el valor supremo es el éxito o la superación.

¿Cuáles son nuestros valores? En general, toda sociedad en crisis ve sacudida su escala valorativa y hasta registra una serie de falsos valores. De pronto, la sociedad, que necesita superar la angustia a que la somete su propia crisis, resuelve que su ineficiencia, por ejemplo, constituye una "manera de ser", y la reivindica como más humana, convirtiéndola en un falso valor, frente a la eficiencia "maquinal", "deshumanizada" de otros pueblos.

Si vamos a discutir qué sociedad queremos, estamos obligados a determinar los valores que deberán guiarla.

Sin duda, la libertad es el primero. Y, como parte de ella, el respeto a la discrepancia. También necesita-

mos fomentar el sentimiento de venezolanidad, haciéndolo activo, militante, y asociarlo a la ambición que nos libere de la actitud conformista de quienes —para cubrir cualquier defecto nuestro— alegan que Venezuela es así, y nos mueva a construir una Venezuela mejor.

Para eso, también el esfuerzo personal debe ser considerado un valor, premiado por el reconocimiento social.

La solidaridad —tan ausente en nuestros tiempos, donde el falso valor de un individualismo a ultranza nos ha llevado a que, inclusive, la arquitectura de nuestras ciudades fomente el aislamiento— es otro valor esencial que debemos incorporar a la conciencia colectiva.

Si, en vez del egoísmo, la flojera y el facilismo, logramos que sean la solidaridad, el esfuerzo y la grandeza los valores motores de la sociedad venezolana, habremos echado las bases de un país sustancialmente diferente y mejor donde venga primero la gente.

La corrupción

—¿No cree usted que uno de los mayores problemas de Venezuela es la corrupción? ¿Qué haría para combatirla?

—La corrupción es, en efecto, uno de nuestros graves problemas. Y tiene, a mi juicio, una extensión mayor de la que se le asigna corrientemente. Cuando los dirigentes de los partidos políticos aluden a la corrupción, y a la necesidad de erradicarla, sugieren que la corrupción es una irregularidad, una anomalía, que mancha un sistema básicamente limpio, sano, exento de otros aspectos criticables. Usan la palabra corrupción como sinónimo de comisión, y creo que la comisión es sólo una de las formas de corrupción. Para mí, el cambur es corrupción. El uso de los dineros públicos en favor de un partido, es corrupción.

Lo que corrompe, no es sólo el desfalco. Quizás el desfalco y la comisión sean las formas más burdas, y, por lo tanto, las más fáciles de combatir. Es cierto que, en Venezuela, ni siquiera esta forma de corrupción ha sido combatida eficazmente.

Podría creerse, por lo tanto, que mucho menos podrá combatirse la corrupción más sutil, más encubierta, menos frontal. Sin embargo, creo que sí hay forma de combatir, tanto la corrupción primaria, o sea la malversación, como las formas menos notorias pero igualmente nocivas de dilapidar los fondos públicos. Este tema se relaciona íntimamente con el de los valores. Si acostumbramos a la gente a pensar que primero es

el partido, si inculcamos la idea de que —en la lucha con el adversario político— todo es válido, si postulamos que el fin justifica los medios, no podemos luego aspirar a que los funcionarios sean probos, a que piensen en función del interés nacional y a que cultiven el desinterés personal.

Cuando un partido político ofrece un puesto público a cambio de apoyo en una campaña, está realizando un acto de corrupción.

Está diciendo que pagará el favor que se le haga con un puesto pagado por la gente y reservado a individuos de mérito. Comprar voluntades y pagarlas con el dinero de todos, es el primer acto de corrupción en el que incurren las roscas de los viejos partidos. ¿Qué autoridad pueden tener ellos, luego, para condenar a quienes mal usan sus puestos?

Es duro decirlo, y sé que a muchos dirigentes políticos les parecerá excesivo —porque ellos mismos no se han detenido nunca a analizar, con criterio riguroso, su propia conducta— pero la principal fuente de corrupción son las reglas de juego que, tácitamente, han fijado los propios partidos. Ellos han aceptado que la Administración Pública es un botín. Ganan los blancos, echan a la calle a los verdes; los verdes protestan pero, en definitiva, lo que hacen es prepararse para la próxima elección. Si ganan, botarán a los blancos. Ninguno de ambos bandos parece entender que los puestos públicos están pagados por todos nosotros; que los sueldos salen de los impuestos. Disponen de ese dinero, desprejuiciadamente. Usan los puestos como premio, y el despido como sanción. ¿Qué presión moral se ejerce sobre un hombre a quien, desde el principio, se le hace notar que su principal mérito será ser fiel al partido y su peor pecado adoptar actitudes contrarias al mismo partido? Si la única ley es la lealtad al partido, no se puede esperar probidad en el ejercicio de la función pública.

Revisemos la historia política de Venezuela en los últimos años.

La corrupción ha sido, solamente, el pretexto que se ha escogido para legitimar sanciones aplicadas a ciertos funcionarios, no por su gestión, sino por actitudes que sus respectivos partidos juzgaron como he-rejías.

En este contexto, con una escala de valores tan distorsionada, carece de sentido cualquier acción moralizante.

Para decirlo en términos sencillos: si lo primero es el partido, o el partido es todo, la corrupción es un mal inevitable. En cambio, si lo primero es la gente; si el funcionario está sometido, no al criterio de una dirigencia partidaria, sino al juicio de la gente; si los puestos públicos comienzan a verse como instrumentos para servir a la gente, y no como recompensas por los servicios prestados a un partido, entonces sí podemos establecer una moral pública firme, en reemplazo de esta hipocresía a la que hoy asistimos. Estoy convencido de que, en estas condiciones, Venezuela nunca tendría una Administración pública limpia. Y eso me afirma en mi convicción de que es necesario establecer una nueva escala de valores, para que la corrupción deje de ser un arma que se descarga contra el enemigo político y se vea como lo que verdaderamente es: un mal que necesitamos erradicar, para asegurar un Estado más eficiente, para enaltecerlo y para desarrollar el sentimiento ético que nos ayudará a construir un país mejor donde efectivamente lo primero sea la gente.

La delincuencia

—La gente está ciertamente preocupada por el auge de la delincuencia en nuestro país. ¿Cómo solucionaría este grave problema social?

—Cada vez que se trata este tema, aparecen las opiniones extremas: unos quieren reprimir sin contemplaciones y otros proponen que analicemos la delincuencia con criterio benévolo, viendo al delincuente como la primera víctima de sí mismo.

En esto, como en todo, creo que debemos ser realistas.

Es cierto que la delincuencia es un producto social. Toda sociedad tiene sus deficiencias, económicas, sociales o culturales, y esas deficiencias promueven distintas conductas antisociales. En cada caso concreto, para encarar el problema de la delincuencia es por lo tanto necesario que se ataquen sus causas específicas. Y, en Venezuela, las pobres condiciones de vida de millares de personas, su falta de educación, el abandono en que se encuentran, son factores que, sin duda, producen delincuencia. Por eso, cuando auspiciamos la elevación de la calidad de vida, cuando proponemos extender los beneficios de la educación, cuando planteamos la necesidad de construir una nueva escala de valores a partir de una realidad que le permita a la gente satisfacer sus necesidades vitales, estamos esbozando un plan que tendrá, como efecto secundario —pero de primordial importancia— la eliminación de causas de delincuencia.

Ahora bien, yo no creo que por eso debamos sentarnos a esperar que la delincuencia se acabe sola. Yo sí creo que el delito no es la enfermedad sino el síntoma, pero una terapéutica correcta es la que combate las causas del mal (a largo plazo) y simultáneamente procura suprimir ya mismo sus efectos.

Mi experiencia como Gobernador de Caracas me enseñó que es necesario revisar la legislación procesal penal —para eliminar las ventajas indebidas que en algunos casos concede a los delincuentes—; y es necesario, asimismo, dotar de mayores recursos a las organizaciones policiales, para que sus servidores eleven su dignidad y se incrementen también la tecnificación de esas organizaciones. En adición, creo que los establecimientos penitenciarios también merecen una mayor atención, a fin de aumentar su seguridad e impedir la promiscuidad, para que el paso por la prisión no sea, en el caso de quienes ocasionalmente han cometido un delito, una especie de postgrado en delincuencia.

En síntesis, lo que propongo es esto: vamos a ir removiendo tenazmente las causas de este terrible mal social, pero desde ya hagamos más severa la Ley, mejoremos nuestra policía y reformemos los regímenes carcelarios, para contener este auge delictivo que nos preocupa a todos.

Esto es prioritario en nuestra concepción. Porque si lo primero es la gente, nada hay más importante que garantizarle a la gente su vida, su integridad, su tranquilidad personal. Y para eso es necesario atacar el problema de la delincuencia en su raíz y en sus efectos, sin demoras y eficazmente.

Los jóvenes

—¿Cree que su visión de Venezuela será compartida por la juventud, en particular la juventud estudiantil?

—Es que la mía es una propuesta nacida de la juventud. Son los jóvenes quienes, no pudiendo aceptar la democracia como el simple resultado de una comparación entre “antes” y “ahora”, reclaman, además de libertad, imaginación; además de elecciones, participación; además de partidos, reforma social. Son los jóvenes quienes aspiran a que, en vez de felicitarnos por la democracia que tenemos, nos esforcemos por profundizarla y perfeccionarla.

Las nuevas generaciones reniegan de la “civilización del petróleo”, porque la identifican con el conformismo, la abulia, la vorágine consumista y la copia de patrones de vida que han entrado en crisis y están sometidos a fuertes cuestionamientos en sus propios países de origen. Temen que una democracia adormecida nos lleve a constituirnos en remedo de los aspectos más negativos de otras sociedades.

Y, frente a esas inquietudes, ¿qué respuesta reciben los jóvenes? Que antes de 1958 todo era más sombrío; que antes de 1958 no habrían podido exteriorizar ni esas inquietudes ni las ideas que hoy pregonan libremente. La juventud no puede conformarse con esto. Si la juventud se contentara con las comparaciones, y lo aceptara todo: el capitalismo sólo porque es mejor que el feudalismo, la pobreza en Venezuela porque es menos dramática que la pobreza en Asia, o los

errores de los partidos porque más insidiosos eran los de la dictadura, entonces la juventud perdería su fuerza y su mérito.

Las nuevas generaciones de venezolanos no reniegan de la libertad, sino que la consideran algo ya conseguido, un bien natural que debemos preservar pero que no excusa todas las otras deficiencias que tenemos. Pretenden, además de esa libertad, la imaginación, la participación y las reformas que caracterizan mi visión de la Venezuela futura.

Los universitarios no presentan un cuadro distinto. Hay, en Venezuela, viejos e injustos prejuicios contra la Universidad. Se sigue diciendo que es un "nido de subversión" y hasta los líderes políticos tienen miedo de entrar en sus dominios.

Lo cierto es que la Universidad reúne a los jóvenes y, así como el sindicato —al reunir a los trabajadores— da fuerza a los reclamos laborales, ella amplifica y hace mucho más sensibles las reivindicaciones de esos jóvenes. A menudo, tales reivindicaciones asumen formas inadecuadas, fruto de la misma inmadurez política que caracteriza a la mayoría de los jóvenes, para quienes la política no es el arte de lo posible sino el ejercicio de lo deseable. Pero cometen un grave error quienes, por no comprender esas reivindicaciones o no saber cómo manejar esas exteriorizaciones inadecuadas, pretenden ignorar a la Universidad o "descalificarla" con adjetivos injustos. Esa conducta lleva al marginamiento de los jóvenes intelectualmente más valiosos, les cierra el paso a la participación y, en definitiva, es un estímulo a esa subversión que alucinadamente se quiere ver en cada aula.

Con gran desprecio, algunos dirigentes políticos sostienen que las actitudes revolucionarias de los jóvenes se curan solas, que el estudiante deja de ser problema cuando se gradúa y que la protesta es un sarampión por el que todos pasamos alguna vez. Creo que eso es injusto respecto de los jóvenes, y respecto de ideologías que no comparto pero que merecen ser discutidas con

mucha seriedad. Jean Paul Sartre es, en su vejez, un hombre de izquierda; y hay muchos individuos que son, en la juventud, marcadamente conservadores. La rebelión juvenil de los años 60, en el mundo entero, se inspiró en el pensamiento de un hombre canoso y experimentado como Herbert Marcuse. Es cierto que muchos jóvenes abrazan ciertas ideologías sin una convicción bien formada, a menudo por razones más psicológicas que políticas, y en esos casos, generalmente, es también cierto que el tiempo los hace abandonar sus ocasionales ideas. Pero ni el pensamiento revolucionario es algo tan frívolo que pueda desestimárselo alegremente, ni todos los jóvenes son tan banales como para carecer de ideas firmes.

Creo que la democracia venezolana ganaría mucho si en vez de aislar a los universitarios, se preguntara seriamente por qué esos millares de jóvenes se sienten disconformes y se entregan, unos —ocasional o definitivamente— a doctrinas extremistas, y otros al nihilismo político. Personalmente, creo que la causa está, precisamente, en que sienten la democracia como un sistema incompleto y ajeno a ellos mismos. La democracia venezolana parece ser satisfactoria sólo para los viejos políticos, que después de años de exilios y grillos, ahora disfrutan, en la vejez, del poder al que entonces no tenían acceso. Pero que, con mayor suavidad que las dictaduras, también niegan ese acceso a quienes no participan de su mismo credo.

Una posición de centro

—¿Cómo se define usted? ¿Es de izquierda o de derecha?

—Este es un chantaje político que frecuentemente se les hace a los venezolanos. Se los quiere obligar a elegir entre dos opciones únicas, como si no hubiera alternativas.

¿Por qué tendría uno que ser o de izquierda o de derecha? Claro, si esas fueran clasificaciones muy amplias, y dentro de la izquierda incluyéramos, por ejemplo, a todos quienes propugnan reformas sociales —desde las más superficiales hasta las más radicales— y dentro de la derecha a todos quienes defienden el inmovilismo con diferentes argumentos, entonces sería más fácil contestar. Pero la respuesta sería poco útil, ya que, con semejante laxitud, Lenin y Abraham Lincoln pertenecerían a una misma categoría.

En el lenguaje corriente, se llama izquierda al marxismo y derecha al conservadorismo. ¿Por qué uno está obligado a ser marxista o conservador?

En ese caso, y aun cuando la palabra centro es usada a veces como eufemismo de derecha, yo elegiría esta palabra, en su sentido estricto, para definir mi propia posición política.

Es lo que hizo, en España, Adolfo Suárez, con quien he conversado largamente este tema. No asumo la propuesta específica de Suárez, que corresponde a la realidad de España —tan distinta de la nuestra—, pero

sí asumo, en términos teóricos, su definición de "centro democrático".

Para Suárez, esa posición consiste en el aunamiento "de las fuerzas políticas hoy preponderantes en las democracias occidentales avanzadas"; liberales, socialdemócratas, democristianos e independientes con "capacidad de diálogo y de renuncia a la propia imagen, en aras de un consenso amplio". El "centro democrático" es tan claro en sus límites "como respetuoso de las posiciones que están a su derecha y a su izquierda; porque el centro es la vía segura a la democracia de todos y para todos, no se trata de usurpar posiciones suficientemente definidas, sino de acercarlas en lo posible, que es mucho, para hacer de esa coincidencia patrimonio común de la Nación".

Esta no es, por cierto, una posición de derecha, y en España dan fe de ello los derechistas, que han combatido y combaten al "centro democrático". Pero, ¿no sería equívoco decir que —por no ser de derechas— de izquierda?

Preservar el sistema democrático, incrementar la participación de la gente en la toma de decisiones, promover el desarrollo económico, redistribuir los excedentes, elevar la calidad de la vida de todos los habitantes, proteger los derechos humanos... ¿qué etiqueta debemos ponerle a esta propuesta? Las etiquetas sirven para avisarle a uno qué va a encontrar dentro del frasco. ¿Es eso lo que se espera encontrar en un frasco que diga "izquierda" o en otro que diga "derecha"? No, no es exactamente eso. Si estoy obligado a una definición geográfica de mi planteamiento, opto, definitivamente, por considerarme de centro.

Sin embargo, me gustaría que todos nos acostumbráramos a analizar las propuestas políticas con esquemas menos rígidos. En mi caso, si se quiere, por ejemplo, saber cuáles son mis inclinaciones en materia social (que frecuentemente es lo que les preocupa a quienes preguntan si somos de izquierda o de derecha), es preferible remitirse a mi obra como Gobernador de

Caracas. La reforma impositiva, la reapertura de las playas públicas, la construcción de viviendas populares en sustitución de ranchos, la remodelación de la Maternidad Concepción Palacios, son mucho más elocuentes que esos rótulos ambiguos. Sintetizan mejor mi propuesta de cambio en libertad; reflejan con mayor fidelidad mi visión de una democracia abierta, eficiente y equitativa.

La nueva dimensión de Venezuela

—Usted señala insistentemente que debemos adecuarnos a “la nueva dimensión de Venezuela”. ¿Cuál es, exactamente, esa nueva dimensión?

—Cada país tiene una dimensión propia, que le es dada, entre otros factores, por sus recursos materiales, su grado de desarrollo y su vocación de participar en la vida internacional.

En lo económico, Venezuela ha sido, tradicionalmente, un país agrícola con un gran lago de petróleo en el que operaban compañías internacionales. Políticamente, el país estuvo sometido a las autocracias, hasta hace apenas veinte años. La vocación de tomar parte en los asuntos internacionales, estuvo ausente de nuestros gobiernos, aun después de ingresar en la democracia. Venezuela era un país parroquial.

En los últimos años, esa realidad ha sufrido cambios violentos. La OPEP —que fue auspiciada por nuestro país, a través de Juan Pablo Pérez Alfonzo, y que se fundó y creció con el aporte de Venezuela— introdujo un elemento imprevisto en el juego de la economía mundial, logrando que los países productores de petróleo percibieran precios más justos. La estrategia de la organización, al insertarse en una compleja coyuntura internacional, produjo en 1973 una súbita revalorización del petróleo que nos significó, en un solo año, 28.000 millones de bolívares adicionales.

Teóricamente, dejamos de ser un país subdesarrollado, si tenemos en cuenta que, de acuerdo con los

indicadores internacionales, un país abandona esa condición cuando está en condiciones de financiar, con recursos financieros propios, un crecimiento sostenido de su producto bruto. Venezuela, repentinamente, se vio en condiciones de autofinanciarse.

Por otra parte, la democracia venezolana estaba, a esa altura, definitivamente estabilizada. Y la diplomacia personal de Carlos Andrés Pérez —que sólo encuentra un antecedente parejo en la desarrollada por Rafael Caldera— nos dio presencia en todos los centros de poder internacional. Venezuela se convirtió, inclusive, en intérprete y vocero de los países de la periferia, abogando por un nuevo sistema económico internacional.

Este conjunto de circunstancias ha provocado que Venezuela empezara a ser recurrentemente aludida por la prensa mundial, que hombres de negocios y diplomáticos llegaran casi a diario a Caracas, que empresas extranjeras se interesasen en desarrollar en nuestro país diversos proyectos.

Todo eso es lo que se sintetiza al decir que el país adquirió una nueva dimensión. Fenómeno del cual los venezolanos no tenemos una adecuada percepción. El país parece no darse exacta cuenta de los cambios que se han operado en él.

He nombrado a tres venezolanos que protagonizaron este proceso de cambio: Pérez Alfonzo, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Pero, ¿quién más ha comprendido esta revalorización de Venezuela? Ni siquiera los propios partidos de esos hombres. La precampaña electoral, iniciada en 1977, nos ha puesto en evidencia que los candidatos y sus respectivas organizaciones políticas no han visto lo que, en estos años, pasó por delante de sus ojos. Sus discusiones nos hacen creer que estamos en la campaña electoral de 1963. No tienen en cuenta la nueva dimensión de Venezuela, que nos impone nuevas responsabilidades y nos obliga a redimensionar, también, nuestra imaginación; a desembarazarnos de esquemas y hábitos mentales que corres-

ponden a la Venezuela del pasado, y desarrollar un gran debate en el que todos los sectores, responsablemente, aúnen criterios sobre la Venezuela que queremos para el futuro inmediato, y para después. Un debate que nos exigirá renunciar al dogmatismo y a la autosuficiencia, y que demanda la participación activa de las nuevas generaciones.

Estados Unidos

—¿Cuál es, a su juicio, la actitud que Venezuela debe adoptar frente a Estados Unidos?

—Estados Unidos es un país muy complejo, con extraordinarias virtudes y grandes defectos. Las visiones unilaterales, ya sean favorables, ya sean adversas, no ayudan a comprender la realidad norteamericana. Y, dado que se trata del país más poderoso de la Tierra, es indispensable entender a Estados Unidos.

Hay quienes ven a Norteamérica como un paraíso. Consideran que todo tiene, allá, el sello de la eficiencia, el orden y la equidad. Cuando llegan por primera vez a Estados Unidos, les ocurre lo que a ese escritor sudamericano que se extrañaba de ver charcos y perros vagabundos en Boston.

En el otro extremo, hay quienes ven a Estados Unidos como el emporio de la codicia, la superficialidad y el maquinismo más grotesco.

Más allá de cualquier actitud extrema, lo cierto es que Estados Unidos ha logrado —en parte con procedimientos opinables— el más alto grado de desarrollo que haya conocido país alguno, y ofrece, por lo tanto, un potencial, una organización social tan sofisticada y unos recursos (económicos y tecnológicos) tan avanzados, que se han convertido en la medida de los máximos logros a que puede aspirar cualquier otro país. La importancia de cualquier sociedad, capitalista o co-

munista, se mide hoy en día en función de cuán lejos o cuán cerca se halla de los standards norteamericanos.

Como es natural, un desarrollo tan intenso, que ha generado un estilo de vida propio e impone, a los efectos de su realimentación continua, una conducta tan distinta de la de otras sociedades, ha dado origen a una serie de problemas filosóficos. Los intelectuales norteamericanos se plantean hoy preguntas tales como: ¿vale la pena el desarrollo a ultranza? ¿No se pierden de vista, en la persecución del crecimiento económico, valores más importantes que los índices del producto nacional bruto? La necesidad de mantener la supremacía mundial, ¿no ha llevado a los Estados Unidos a adoptar actitudes contrarias a sus propios principios?

De ese conjunto, tan complejo, de realidades y problemas, yo creo que nosotros debemos aprovechar lo más positivo, sin prejuicios de ninguna naturaleza. Estoy seguro de que, aun los más obstinados adversarios de Estados Unidos, estarían satisfechos de que Venezuela adoptara el religioso respeto a la libertad de expresión, la extraordinaria preocupación por las ciencias y la disciplina social que caracterizan a los Estados Unidos.

Para ello, no sirve el ojo selectivo de quien sólo ve la discriminación racial, los excesos de la CIA y las ideas de Barry Goldwater; ni el ojo igualmente selectivo de quien sólo ve el *apple pie*, la televisión en colores y la estatua de la Libertad.

Esas visiones unilaterales no sólo simplifican al extremo la compleja realidad norteamericana, sino que no tienen en cuenta la transformación que dentro de Estados Unidos se está produciendo, y de la cual el presidente Carter es la expresión más notoria. Su administración les ha propuesto a los norteamericanos, precisamente, revisar su sociedad, rescatar sus aspectos más valiosos y expurgar culpas.

Siempre la política exterior de un país es consecuencia de su política interior y, por eso, tiene para nosotros gran importancia esta etapa que está viviendo

Estados Unidos. Todos los agravios que América Latina pueda haber recibido de ese gran país, provienen de los períodos en los que Estados Unidos (o sus organismos de defensa) actuaron fuera del ámbito delimitado por esos principios esenciales que ahora se procura restablecer en integridad, y que se sintetizan en el más celoso respeto de los derechos humanos.

Los países emergentes

—¿Cree usted que Venezuela pertenece al “tercer mundo”?

—Ese es un término equívoco, que prefiero no emplear. En alguna oportunidad ha sido útil, para designar con una sola expresión al conjunto de países que, en comparación con las naciones más desarrolladas de Occidente y del mundo comunista, resultan desfavorecidos por el sistema económico internacional.

Luego, la expresión “tercer mundo” ha sido usufrutuada ideológicamente. Creo, sí, que debemos ser solidarios con las reivindicaciones de todos los países emergentes que, como Venezuela misma, no han alcanzado el pleno desarrollo y dependen exageradamente de la comercialización externa de materias primas. Pero esa solidaridad no puede significar integración de un bloque político, ni mucho menos aval venezolano a las situaciones internas que viven la mayoría de esos países.

En el llamado “tercer mundo” predominan las naciones socialistas y las dictaduras. Nosotros no nos identificamos con el socialismo y nos oponemos a todo sistema dictatorial. El hecho de que nuestro propio pluralismo nos haga aceptar que cada país se dé el régimen que estime conveniente, y la amplitud de criterio que nos permite adoptar, respecto de temas específicos, posiciones comunes con naciones donde rigen sistemas que no compartimos, de ninguna ma-

nera pueden ser indicativos de una solidaridad política que no tenemos.

Tampoco podemos aceptar, por ejemplo, que bajo el manto del "tercer mundo" se nos obligue a tomar partido en conflictos locales como los del Oriente Medio, los cuales deben ser resueltos por los propios antagonistas, a través —es nuestro anhelo— del diálogo y el entendimiento mutuo. Nos negamos a asociar la causa de los países desvalidos del mundo con la agresión a pueblo alguno, como lo hacen quienes usan más insistentemente la expresión "tercer mundo", y también por esto, yo prefiero evitar el término. Estoy de acuerdo en abogar por un nuevo sistema económico internacional, más equitativo, pero prefiero no ponerle a ese propósito una etiqueta dudosa, y me inclino a hablar, más que del "tercer mundo", de los países emergentes.

América Latina

—¿Qué importancia le atribuye usted a América Latina, en relación con el futuro de Venezuela?

—Indudablemente, nuestro futuro estará marcado por lo que ocurra en el continente. No somos una isla. Creo que es indispensable estrechar la amistad con las naciones de la región. La interdependencia es una realidad que hoy no es posible discutir. Estamos inmersos en una tarea común y debemos enfrentarla como tal.

Las teorías que planteaban el aislacionismo como respuesta a fenómenos políticos ajenos a nuestro control, han demostrado su ineficacia. Es indispensable intentar difundir la experiencia democrática. Pero ello debe realizarse por medio de la cooperación y no de la coerción.

Frente al futuro de América Latina, me siento optimista. Lo que ocurrirá en los próximos años, seguramente marcará un sendero en la historia de nuestras naciones. Entre 1978 y 1980, Ecuador, Bolivia y Perú volverán al sistema de la democracia representativa. Los civiles tienen buenas posibilidades de retomar el poder político en Nicaragua y Panamá. Y en países como Argentina, Brasil y Chile, no se descarta una apertura, aunque en un plazo mayor.

Es evidente que en este cambio han influido diversos factores. Desde 1964, América Latina ha vivido una experiencia nueva. El continente, acostumbrado a los golpes militares caudillescos, vio aparecer un

nuevo tipo de dictadura. Se intentó desarrollar un experimento que oponía, a los administradores civiles, administradores militares. El balance que puede hacerse luego de 14 años, demuestra el fracaso de estos regímenes. Los principales problemas —que sirvieron de pretexto a los institutos armados— han subsistido y, en la mayoría de los casos, se han acrecentado. Y el alto costo pagado en libertades conculcadas no se ha reflejado en un mayor bienestar o en un desarrollo económico sostenido. Mientras, las naciones democráticas continuaron irradiando su ejemplo. También ha influido en este cambio la actitud de la administración Carter, que opuso a los regímenes de fuerza la bandera de los derechos humanos.

Por último, ha jugado un papel importante la comprobación de que es imposible impulsar esquemas de desarrollo en forma independiente. América Latina, ahora más que nunca —porque cuenta con una experiencia que la respalda— ha comprendido que sólo como unidad podrá jugar el papel que históricamente le corresponde.

Organismos como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) han permitido constatar que la cooperación no solamente es posible, sino indispensable. Incluso, mecanismos de integración subregional —a pesar de fracasos coyunturales determinados por factores políticos— también han servido para ampliar la perspectiva. Todo ha demostrado que, para salir del subdesarrollo, no basta con contar con capitales y tecnología. Lo fundamental es poder manejar sin trabas esa tecnología e impedir que los dueños de los capitales superpongan sus propios intereses a los de las naciones.

En la etapa actual, Venezuela ya juega un papel de primera magnitud —como nunca antes— en el concierto de América Latina. Y en la medida que el proceso de democratización avance, nuestra responsabilidad será aún mayor.

La perspectiva venezolana hacia el exterior tiene que ser, en primer lugar, una perspectiva latinoameri-

cana. Este es nuestro radio de acción natural. Eso no quiere decir que desconozcamos los lazos que nos unen a naciones como las integrantes de la OPEP. Pero es conveniente comprender que lo que ocurra en el continente siempre nos afectará, tal vez con una mayor significación histórica.

¿Y cuáles son los principales problemas que enfrentan los países latinoamericanos? Sin duda, los derivados del subdesarrollo. La experiencia vivida hasta hoy nos ha demostrado que no podemos esperar soluciones desde afuera. La independencia económica tenemos que alcanzarla a través de los medios con que contamos realmente. América Latina puede llegar a ser autónoma. Tiene el potencial para ello. Y trabajar por el logro de esa meta, deberá ser objetivo prioritario de los próximos gobiernos venezolanos.

El mayor obstáculo es la falta de capitales. “Somos un continente pobre”, es la frase que se repite con mayor frecuencia cuando se abordan estos temas. Sin embargo, esa es una realidad limitante sólo si se considera a cada país en forma individual. No lo es si miramos el conjunto. La carencia de capitales puede ser resuelta a través de la formación de empresas multinacionales latinoamericanas. Debemos impulsar tales iniciativas. Y no sólo porque económicamente resulten rentables. Además —y fundamentalmente— por sus resultados políticos.

América Latina no puede conformarse con seguir desperdiciando su potencial en beneficio de grandes potencias. Estamos entrando en una nueva etapa que hay que aprovechar. Y todo lo que se pueda hacer por acercar a las naciones, debe intentarse. Incluso, impulsando acuerdos que resuelvan diferencias relacionadas con las fronteras, que en nada ayudan al ánimo integrador.

Las suspicacias y recelos sólo dividen. Nuestro tiempo es el de la unidad.

El desarrollo armónico

—Usted ha hablado, reiteradamente, del desarrollo autónomo de Venezuela. ¿Es posible esa autonomía?

—La falta de confianza en sí mismos es uno de los escollos más difíciles que les toca superar a los países en vías de desarrollo. La subordinación a la que, tradicionalmente, han estado sometidos, los ha acostumbrado a pensar en términos de impotencia. A creer que, en definitiva, su atraso es consecuencia, no de factores históricos, sino de su propia naturaleza.

Por otra parte, se ha tejido —a partir de hechos ciertos, que sería absurdo negar, pero que son mucho más manejables de lo que se cree— una fantasía sobre los superpoderes internacionales, a los cuales estaríamos insuperablemente sujetos.

Estos dos factores psicológicos, la falta de autoconfianza y la fobia a los superpoderes externos, aumentan considerablemente nuestra debilidad objetiva, y nos impiden ver que sí hay modos de lograr el desarrollo autónomo.

En este sentido, los venezolanos deberíamos haber aprendido la lección. Cuando se resolvió nacionalizar el petróleo, cundieron los pesimistas: “Esta es una industria hipertecnificada y, si no dejamos que la exploten directamente las compañías extranjeras, mataremos la gallina de los huevos de oro”, decían unos. “Los norteamericanos no abandonan así un negocio, sólo porque a nosotros se nos ocurra que debemos nacionalizarlo”, advertían otros. El panorama era poco

alentador: íbamos a perder, por nuestra ineficiencia, mucho dinero; e íbamos a conseguirnos un pleito con los Estados Unidos que podría poner en peligro desde nuestra seguridad económica hasta nuestra estabilidad política.

Contra esas predicciones, los venezolanos hemos demostrado que no sólo somos capaces de conservar mejor nuestra riqueza básica y de explotarla en condiciones de rentabilidad similares a las de las grandes corporaciones trasnacionales, sino que —actuando con prudencia, jurídicamente y sin vocinglerías— podemos ganar autonomía sin echarnos encima ninguna fuerza externa.

Los teóricos, y los retóricos, hablan demasiado de la dependencia; pero a menudo olvidan que las relaciones dependientes tienen dos sujetos, y que el dominante avanza cuando el dominado retrocede. En muchos casos, eso obedece a las diferencias objetivas que los separan, pero frecuentemente el retroceso obedece a esos factores psicológicos. De allí la importancia de una propuesta que entusiasme y restablezca el orgullo de los venezolanos, inclusive para favorecer la autonomía económica del país.

Los empresarios

—¿Cree que los empresarios deben influir en el manejo del Estado?

—Nosotros hemos elegido, como el sistema más conveniente para el desarrollo de nuestras potencialidades, el de la libre iniciativa. Es, sin duda, el sistema más dinámico, el más innovador, el que marca los caminos que transitan, inclusive, los países socialistas. De hecho, todo el empeño del mundo socialista ha consistido, hasta ahora, en alcanzar por otras vías, lo mismo que —con celeridad, bajo costo social y un ambiente de libertades— los principales países de Occidente consiguieron a través de la libre iniciativa.

Y entre quienes ejercen esa libre iniciativa en la cual tanto confiamos, los empresarios constituyen una fuerza esencial. ¿Cómo podría pretenderse, sin entrar en una contradicción insoluble, que continuáramos con el sistema de libre iniciativa y negáramos participación política a los empresarios?

Claro, hay quienes sostienen que el sector empresarial es un acelerador del desarrollo económico y un freno a la equidad social. Yo creo que hay, en esto, mucho de prejuicio, e inclusive de ignorancia.

El empresario necesita que el país sea política y socialmente estable; necesita —para el propio desarrollo de su empresa— que el mercado interno se ensanche y se fortalezca o, lo que es lo mismo, que aumente el poder adquisitivo de todos los sectores sociales. Ese empresario depende, además, de que la mano de obra

sea cada vez más eficiente y calificada. Aun cuando fuera por razones egoístas, el empresario debería estar a favor de una mejora sustancial en la calidad de la vida de los venezolanos. Y no hay ninguna razón, además, para creer que entre los empresarios hay menos patriotismo que entre otros sectores de la sociedad.

Desde luego, si partimos de criterios anti-empresarios, y planteamos ideas insidiosas, cualquier reforma que auspiciemos encontrará la resistencia natural del empresariado. Pero si, en cambio, definimos claramente objetivos y métodos, con la participación de ese mismo empresariado, podemos —sin ninguna duda— apelar a la comprensión, la cooperación y la capacidad de sacrificio de ese sector.

Pongamos un ejemplo: si auspiciamos una reforma impositiva revanchista, destinada sólo a agredir al empresario —como la reforma que podría proponer un grupo radical—, nos estrellaríamos contra un sector empresarial homogéneo y firme en la defensa de sus derechos. Asimismo, si propusiéramos una reforma impositiva fiscalista, pensada para hacerles pagar a empresarios eficientes la ineficiencia de un Estado mal administrado, también chocaríamos contra esa muralla que —con todo derecho— nos levantaría el empresariado.

En cambio, si ideáramos una reforma impositiva con el propósito de movilizar nuestra riqueza, vigorizar el mercado interno, financiar un vasto programa de obras públicas —en las que el sector privado tendrá interés directo e indirecto—, y sometiéramos esa reforma a la discusión de todos los grupos sociales; si armonizáramos criterios y lográramos el compromiso de apoyo, tanto de las organizaciones obreras como de las organizaciones empresarias, estoy seguro de que no tendríamos inconvenientes en la ejecución. No estoy proponiendo una reforma impositiva sino recurriendo a un ejemplo que me parece elocuente porque en la Gobernación del Distrito Federal pude comprobar cómo un tema tan delicado como éste puede re-

solverse favorablemente, si hay criterio de justicia y disposición al diálogo.

Si el desarrollo económico y la elevación de los *standards* de vida es un negocio para todos los sectores, ¿por qué no buscar la concertación de los medios para alcanzar esos objetivos?. Yo creo que, en el sector empresario, no sólo vamos a hallar comprensión y desprendimiento, sino que encontraremos entusiasmo. Además, desde ese punto de vista instrumental, no hay ningún otro sector —ni siquiera el estatal— que tenga, en Venezuela, más experiencia y conocimientos que aportar. Los empresarios constituyen una fuerza vital, y su aislamiento no es bueno, ni para ellos mismos, ni para el país. Por eso yo propongo incorporarlos efectivamente a la construcción de la nueva Venezuela.

—¿Cómo haría usted para superar la ineficiencia del Estado?

—No creo que el Estado sea, *por definición*, ineficiente. Hay ejemplos, en el mundo, de Estados que se manejan con una gran eficiencia.

Lo que ocurre en Venezuela es que el Estado ha sido la “bolsa de trabajo” de los afiliados a AD y COPEI. Una estructura extensible, predispuesta para ocultar la falta de trabajo o compensar con recursos públicos la participación en la vida política.

Además, el Estado —por su gran magnitud y tradición burocrática— ha sido el órgano con menor capacidad de adaptarse a la nueva dimensión de Venezuela. Se vio sorprendido, atorado, por los recursos repentinos y las nuevas expectativas de la población.

Con todo y con eso, el mismo Estado venezolano ha dado, en ocasión de ser nacionalizado el petróleo, una prueba de capacidad. Petroven (y en eso, seguramente, influyó el hecho de ser un ente nuevo, a cuya formación e integración concurrieron técnicos con alto grado de especialización) no desmejoró, en eficiencia, la explotación que hacían las petroleras privadas.

A los fines que todo el Estado funcione con parecida eficiencia, es necesario establecer acuerdos con el sector privado para transferirle personal excedente, incorporar técnicos en todos los puestos donde se los necesite y modificar los sistemas operativos. Pero el

solo hecho de que llegara al poder una fuerza distinta de los dos partidos tradicionales, ya contribuiría a aumentar la eficiencia del Estado. Porque, entonces, ya no habría más derechos indebidamente "adquiridos", ni ganadores del "5 y 6" de la política, que paga con puestos públicos. Además, habría otra concepción presidiendo el aparato del Estado.

Simultáneamente, habría que liberar, sí, al Estado de algunas responsabilidades que ha asumido, y que el sector privado podría desempeñar con mayor eficacia. Hay razones esenciales que obligan al Estado a controlar directamente algunas actividades íntimamente ligadas a la seguridad de la Nación; pero hay otras actividades que están en manos del Estado sólo por razones históricas, que una reforma racional removería.

Lo importante es que no nos formemos un prejuicio contra el Estado. En esta etapa de la evolución del mundo, el Estado es una organización insustituible, que ni los regímenes más privatistas han desarticulado.

En los Estados Unidos, por ejemplo, se reconoce que el extraordinario desarrollo de la actividad privada —reflejado en el crecimiento y la multiplicación de empresas transnacionales originadas en ese país— en gran parte fue promovido por el Estado. Este, a través de los gastos para la defensa nacional y, luego, los planes espaciales, impidió recesiones y creó una demanda tan gigantesca que, sola, la economía privada no habría alcanzado jamás.

El Estado norteamericano es extraordinariamente fuerte, su presión tributaria es muy alta y las actividades que desarrolla —desde proteger a los ancianos y pagar los gastos médicos de gran parte de la población, hasta colocar satélites en el espacio u hombres en la Luna— son sumamente variadas.

Una actitud antiestatal, como cualquier actitud "anti", carece de sentido. Lo que debe preocuparnos es cómo perfeccionar y dar mejor uso a los instrumentos que el Estado provee.

Las Fuerzas Armadas

—¿Qué papel deben jugar las Fuerzas Armadas en la democracia abierta que usted propugna?

—Las Fuerzas Armadas deben estar efectivamente incorporadas al gobierno. Debemos precavernos del civilismo, que le ha hecho a América Latina tanto daño como el militarismo.

¿Cuál es el criterio civilista? Las Fuerzas Armadas deben estar fuera del gobierno; dedicadas a sus funciones específicas. Pero, ¿cuáles son esas funciones?. Evitar —y, en su caso, rechazar— las agresiones externas e internas que pudieran sufrir tanto el Estado como el gobierno. Eso significa que la seguridad —y la supervivencia— del sistema gubernamental depende de un poder que el civilismo insiste en situar fuera de ese sistema. Con lo cual lo sitúa, automáticamente, por encima. Lo convierte en una instancia superior. Luego, en ocasión de cualquier crisis, surgen las Fuerzas Armadas como árbitros y —dependiendo de la extensión de la crisis— inclusive como sustitutos del gobierno civil.

Ese es, a mi juicio, un papel que —además de riesgoso para la democracia misma— resulta injusto para las propias Fuerzas Armadas. Los herederos de aquellos hombres que hicieron nuestra Independencia, no pueden ser condenados a desempeñarse como gendarmes o como usurpadores, siempre al margen de los gobiernos normales; ajenos a la toma de toda decisión que no se vincule a lo "específicamente" militar. Ellos,

sobre todo en Venezuela, donde los oficiales no son reclutados entre castas sino que surgen de cualquier clase social, son parte del pueblo.

Hay quienes, aun reconociendo esto, sostienen que la participación política de los militares debe darse en forma individual, sin que la democracia les reconozca a las Fuerzas Armadas como institución ninguna función política. Con excesiva simpleza, dicen: "un militar tiene el mismo derecho a participar que un médico o un agricultor; pero, del mismo modo que el Colegio de Médicos y la Asociación de Agricultores carecen, como tales, de función alguna en el aparato gubernamental, también deben carecer de ella las Fuerzas Armadas". Este es un argumento efectista, muy poco sólido. No tiene en cuenta la naturaleza de la tarea que cumplen las Fuerzas Armadas: preservar la integridad y seguridad del Estado es —a diferencia de curar o cultivar— una actividad esencialmente política. Y entonces, no podemos incurrir en una contradicción tan flagrante: confiarle a una institución un rol político, y luego negarle carácter político a ella misma. Debemos aceptar que las Fuerzas Armadas desempeñan un papel político e incorporarlas, como los partidos, al gobierno. Tampoco los partidos políticos, sino sus candidatos, son los encargados del gobierno, y sin embargo a nadie se le ocurriría negar la función política de los partidos. Un pernicioso prejuicio —contrapartida del militarismo, o supremacía del poder militar, que América Latina ha padecido y padece en muchos países— impide, a menudo, ver esta necesidad de incorporar a las Fuerzas Armadas. Creo que éstas deberían participar en la toma de todas las decisiones cruciales del Estado.

Creo, además, que la inigualable organización y disciplina interna de las Fuerzas Armadas, las convierte en un formidable instrumento para la capacitación. No se trata sólo de que las Fuerzas Armadas desarrollen tareas tales como la alfabetización —en la que han cumplido, aquí y en otros países, una positiva labor— sino de que, junto con la instrucción militar, contribuyan a la formación de técnicos y a despertar

inquietudes nuevas. El servicio militar obligatorio debe dejar de ser visto como una penalización, y convertirse en una oportunidad para perfeccionarse, para conocer en profundidad las distintas regiones del país, para adiestrarse en materias técnicas, para ponerse en condiciones de servir a Venezuela, militarmente en la hipótesis de que fuera necesario, pero normalmente con trabajo, enriquecido por nuevos conocimientos.

También creo que las Fuerzas Armadas deben ejercer una acción social, utilizando sus recursos humanos y alta eficiencia en diversas tareas, que pueden ir desde el cuidado de parques nacionales hasta la remodelación de barrios.

Todo esto es congruente con las modernas teorías militares sobre la defensa nacional, que ya no se reduce a los estrechos criterios del pasado. La defensa nacional, en un país en vías de desarrollo, es —para los actuales hombres de armas— una tarea compleja, que va mucho más allá de capacitar soldados en el manejo de tanques y aviones. El desarrollo económico y la promoción social integran las modernas concepciones sobre defensa nacional, basadas en la necesidad de prevenir no sólo el ataque externo, sino la debilidad de la propia estructura productiva y la inestabilidad social interna.

Por eso, las Fuerzas Armadas están mental y organizativamente preparadas para cumplir un papel de suma importancia en lo económico y lo social; y por eso es necesario concederles la participación que reclaman, no para recortar la democracia, sino para profundizarla; no para sustituir a la voluntad popular, sino para darle a nuestra sociedad mayores recursos y nuevas oportunidades.

La redistribución del ingreso

—¿No cree usted que es necesaria la redistribución del ingreso?

—Sí, pero quiero precisar qué significa para mí redistribuir el ingreso. Hay gente que oye hablar de esto y piensa que se trata de sumar todos los ingresos nacionales, dividirlos por 12 millones y darle a cada uno su parte. Por cierto, si hiciéramos eso, nos perjudicaríamos los 12 millones. Porque el dinero, para que se multiplique, hay que concentrarlo y saberlo aplicar. El aumento del precio del petróleo, en 1973, nos proporcionó recursos excepcionales, que nos enviaron casi todos los países del mundo: 7.600 millones de dólares. Si los hubiésemos repartido entre todos los venezolanos, nos habría tocado 2.700 bolívares a cada uno, ya cada quien habría consumido esa bonificación, y el excedente petrolero se habría esfumado como por arte de magia. Lo sensato era —y hasta cierto punto es lo que se hizo— invertir esa ganancia en fábricas de acero y aluminio, centrales hidroeléctricas, carreteras, equipamiento e investigación tecnológica; era la única forma de convertir esos 7.600 millones de dólares en empleos seguros y riquezas destinadas a dar mucha más felicidad que 2.700 bolívares por cabeza.

Por cierto, repartir por repartir va en contra del adecuado planeamiento económico. Lo que debe redistribuirse es aquella parte del ingreso que se destina al consumo. La redistribución no debe constituirse en un desaliento para el empresario que invierte, porque el

beneficio que la sociedad, en su conjunto, saca de una fábrica nueva, es mayor, infinitamente mayor al valor de esa inversión.

El enfoque social de nuestros problemas no debe distorsionar el enfoque económico, porque eso es contraproducente aun en el mismo campo social.

La redistribución tiene para sí un ámbito muy amplio, que es el del ingreso no reinvertido. Es ahí donde, a través de una adecuada política de gasto fiscal, debe operarse una redistribución de ingresos que, progresivamente, vaya acortando las distancias entre los sectores más favorecidos y los más perjudicados.

En esto, el Estado tiene un papel decisivo que cumplir. Porque tampoco se trata de quitarle plata a uno para dársela a otro. Tomemos el caso de una persona que vive en la marginalidad económica. Por efecto de la misma marginalidad, esa persona arrastra numerosas carencias que se constituyen en una muralla y le impiden salir de la pobreza: seguramente, no ha recibido instrucción; carece de la tecnología cultural necesaria para obtener satisfacción a una serie de necesidades.

Por eso, no se trata sólo de transferir ingresos, sino de acompañar esa transferencia de mecanismos que ayuden a los beneficiarios, complementando el valor de esa diferencia económica. Y eso sólo puede hacerlo el Estado, a través de una política de bienestar social.

Tenemos el ejemplo francés. El Estado se hace cargo, en Francia, de atender algunas necesidades del ciudadano y, a través de las llamadas "asignaciones familiares", paga —con lo que recauda en concepto de impuestos— partos, estudios, alquileres y las más diversas necesidades. El sistema es, en verdad, un modo de obligar al ciudadano a progresar y a cuidarse a sí mismo.

La mujer embarazada tiene, en Francia, derecho a un subsidio durante los nueve meses; pero, para cobrar cada cuota del subsidio, tiene que exhibir el "carnet de maternidad" y en él debe constar que se ha efec-

tuado el examen médico correspondiente. La mujer que no se somete a los cuatro controles médicos que, para los períodos cruciales del embarazo, prevé la ley de protección materno-infantil, no cobra su asignación. Tampoco puede cobrar los subsidios postnatales, que igualmente brinda el Estado, si no somete a su hijo a exámenes médicos al octavo día, al noveno mes y a los dos años.

De manera similar, el Estado francés financia parcialmente —y estimula— el acceso a una vivienda mejor. Para eso, establece cuál es el alquiler mínimo que cada familia —según el número de integrantes y sus posibilidades— debe pagar para vivir en condiciones de dignidad. Si la familia se muda a una casa mejor, el Estado le paga la mudanza y una parte de la diferencia que haya entre el alquiler mínimo y el que le cobren en esa nueva vivienda (o entre el alquiler mínimo y la cuota hipotecaria, en caso de que la familia compre). Ese subsidio es, a menudo, pagado directamente al arrendador o a la institución de crédito hipotecario.

Es necesario aplicar este tipo de mecanismos de promoción social, que implican, a la vez, transferir recursos en favor de los sectores más necesitados e inducir o directamente provocar su aplicación a los fines de mejorar la calidad de la vida en esos sectores.

Para eso, hay que coordinar la acción económica y la acción social del Estado. Un Ministerio de Bienestar Social —del cual dependa todo lo que tenga que ver con la salud pública, la vivienda y el trabajo— debería actuar, sobre esas bases, en estrecho contacto con un Ministerio de Desarrollo, a fin de establecer una adecuada correlación entre ingresos impositivos y gastos sociales. Para eso, no es necesario aumentar la carga tributaria. El instrumental impositivo vigente, unido a la dinámica de nuestra economía, garantizan al Fisco la posibilidad de desarrollar —en los próximos cinco años— una eficaz acción económico-social que permita la elevación de la calidad promedio de la vida en Venezuela.

Desde luego, todo esto es muy complejo; pero es lo único serio que puede hacerse, si de verdad se quiere transferir ingresos con un sentido de equidad y, al mismo tiempo, de eficiencia. Cualquier otra cosa, es jugar a Robin Hood, y este es un juego que los venezolanos no podemos permitirnos. La pobreza en medio de la opulencia es algo que sacude la conciencia y obliga a enfocar el problema, no con demagogia y retórica, sino con realismo y eficacia.

La calidad de la vida

—¿Qué debe entenderse por “la calidad de la vida”?

—Tradicionalmente, se suponía que las necesidades del hombre eran: pan, techo y educación. En nuestros días, eso no puede ser ya considerado como suficiente.

No sólo es necesario que el individuo se alimente; es imprescindible que se alimente bien, que su dieta sea sana, balanceada y rica en proteínas.

No sólo es necesario que el individuo tenga una vivienda; es imprescindible que esa vivienda sea espaciosa, higiénica, funcional y que cuente con los servicios indispensables.

No sólo es necesario que el individuo se eduque; es imprescindible que reciba una instrucción adecuada y, complementariamente, tenga acceso a las diversas manifestaciones de la cultura.

Por lo demás, una vez satisfechas las necesidades primarias y secundarias, surgen nuevas necesidades, que un criterio estrecho no consideraría tales, como la de desarrollar actividades creativas —y recreativas— o la de viajar.

No se trata, además, sólo del micromundo del individuo. También éste tiene necesidad de un entorno satisfactorio, y reclama —si es habitante de la ciudad—, transportes eficientes, aire puro, espacios verdes, aseo urbano, seguridad personal, o —si es habitante del campo—, carreteras, servicios esenciales,

rápido acceso a centros educacionales y de asistencia sanitaria, y facilidades de esparcimiento.

Por cierto, es difícil que, así enunciado el criterio, alguien pueda estar en desacuerdo. Sin embargo, en la práctica hay demasiada gente que pretende circunscribir a los demás a la exclusiva satisfacción de sus necesidades vitales.

Si se propone que, además de dotar al hombre común de vivienda digna, alimentación adecuada y educación, se le dé oportunidad de desarrollar concepciones estéticas, gozar de la técnica moderna y organizar su ocio, la propuesta aparece como "excesiva" ante muchos ojos. La belleza, el arte, el confort, son vistos como lujos y, como tales, negados al pobre por mucha gente que, aun sin darse cuenta, auspicia las desigualdades.

Por eso, es necesario imponer un criterio cualitativo de las condiciones de vida. Hacer comprender que no basta conseguir que el hombre común sobreviva, sino que es obligatorio lograr que viva en plenitud.

Desde luego, en Venezuela estamos muy lejos de eso, porque tenemos mayorías que ni siquiera satisfacen adecuadamente sus necesidades vitales, y parecería una anticipación inconveniente que, mientras tenemos a millares de compatriotas viviendo en ranchos y comiendo sólo caraoas, estemos pensando ya en des-pertarles necesidades posteriores. Sin embargo, debemos hacerlo, no sólo porque definir el objetivo es imprescindible para medir el esfuerzo necesario (que es mucho mayor aún de lo que piensa mucha gente), sino porque todo debe ir lográndose simultáneamente. Si bien el consumo de proteínas suficientes tiene prioridad respecto del disfrute de espacios verdes, en el sentido de que responde a una necesidad más estricta, eso no significa que haya un orden de prelación, y deba conseguirse un objetivo antes de perseguir el otro.

Es más: la adecuada satisfacción de las necesidades primarias depende de que se creen en el individuo

otras necesidades. Eso es así porque, por ejemplo, una dieta insuficiente es resultado, no sólo de las limitaciones económicas, sino del déficit cultural, de los hábitos y aun de las supersticiones que se desarrollan en el interior de esos círculos cerrados de pobreza, que no se rompen sólo con dinero, sino modificando el paisaje físico, social y cultural que condiciona la vida del individuo.

Por eso, elevar la calidad de la vida es un objetivo mucho más ambicioso que el de aumentar los ingresos de la población y conseguir una relativa mejora en la satisfacción de las necesidades vitales. Elevar la calidad de la vida supone un reordenamiento de las prioridades nacionales, necesario para poner a la gente de primero.

Los problemas de la familia

—Está bien señalar que la gente debe ser lo primero. Pero, poniendo los slogans a un lado, ¿cómo se hace para convertir las palabras en hechos? Concretamente, ¿qué haría usted desde la Presidencia, para poner a la gente de primero?

—“Primero la gente”, no es un slogan, no es una frase publicitaria. Es el eje de un pensamiento.

Toda posición gira en torno de un eje. Ese eje puede ser el prestigio nacional, el partido, la ideología, el desarrollo. . . . Todo gobernante toma sus decisiones en función de lo que más le importa, de lo que más le preocupa. Si nada le interesa más que el crecimiento económico, nada habrá para él más importante que una siderúrgica. Si su principal preocupación es su partido, lo principal para él será favorecer a ese partido, y afectar al adversario.

Siempre, el gobernante gira en torno del eje de su pensamiento. Por eso es tan importante saber, en cada caso, cuál es su eje.

Para mí, es la gente. Pero no una idea abstracta, impersonal e idealizada de la gente. Cuando hablo de la gente, pienso en seres de carne y hueso.

Por eso, al concebir nuestra acción de gobierno, giro en torno de la familia, que es donde se plantean y reflejan los problemas de la gente. A partir de allí, el plan de acción va surgiendo casi automáticamente. Uno analiza las necesidades de la familia, desde su constitución, y empieza a internarse en todo lo que tiene

que ver con la vivienda, la salud, la alimentación, los servicios públicos. . . Vamos a hacer un breve ensayo. Este libro (ya está dicho en las primeras páginas) no es un programa de gobierno. Pero es necesario precisar algunas cosas. Demostrar cómo "primero la gente" no es un slogan sino toda una concepción de la vida y la política. Por eso, propongo que, partiendo de las necesidades de la familia, revisemos los grandes temas de la sociedad venezolana actual:

La vivienda. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que significa poner a la gente de primero: según estadísticas oficiales, divulgadas por la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano del Distrito Federal, en 1950, 16.27% de la población caraqueña vivía en ranchos; en 1961, ese porcentaje se había elevado a 19.98 y en 1966 llegaba a 21.90%. El paso de la autocracia a la democracia, el aumento de la renta petrolera, todas las modificaciones habidas en el país durante casi dos décadas, no habían repercutido en la elevación de la calidad de vida de la población; al contrario, había aumentado el porcentaje de venezolanos en condiciones indignas de vida. Y, lo que es más grave, según las previsiones oficiales, en 1990, la situación seguirá prácticamente igual: la población en ranchos será —si nada cambia— de 19.85%, es decir, que ya se está admitiendo que en la Venezuela postpetrolera, la gente va a vivir peor que en la Venezuela de hace 30 años. . . ¿Por qué? ¿Por qué se acepta que la mitad de los venezolanos viva en condiciones situadas por debajo del umbral de dignidad? ¿Por qué un país con recursos tan generosos como los que ha recibido Venezuela en los últimos años, exhibe un problema de vivienda tan grave? ¿Cómo es posible que no se pueda eliminar el déficit? Volvemos siempre a la cuestión fundamental: a fin de que la solución del problema de vivienda sea posible, es necesario que para el gobierno, sea primero la gente; si primero es la siderurgia, o cualquier otra cosa, la vivienda queda "para después" y después, claro, habrá otra "prioridad". No es que no haya dinero para hacer casas, no es que

el Estado no sea capaz, no es que la actividad privada no esté dispuesta a cooperar. Esto lo he comprobado yo como Gobernador: si el gobernante se fija la solución del problema de vivienda como primera prioridad, encuentra los recursos, puede disponer del aparato estatal y halla la cooperación de la actividad privada. Y eso es lo que hay que hacer: utilizar gran parte de los recursos, públicos y privados, para dignificar los cerros —remodelándolos y dotándolos de servicios y comodidades—; construir miles y miles de viviendas decorosas; conceder estímulos impositivos y crediticios para hacer que se multiplique la construcción de edificios.

El objetivo no es sólo acabar con los ranchos. Es resolver el problema que, hoy día, se le presenta a la propia clase media, acosada por alquileres que representan más de 70 por ciento de los sueldos promedio de ese sector. La familia de ingresos medios se ve ante la alternativa de alquileres que no puede pagar o apartamentos regulados, con cánones bajos, que se consiguen sólo si se pagan traspasos —ilegítimos pero, en la práctica, vigentes— que equivalen a siete, ocho o nueve veces un sueldo promedio.

Cuando la gente tenga casas para elegir, no habrá alzas injustificadas ni especulación. Los precios altos y los negociantes son el resultado de que, por cada habitación, hay cuarenta necesitados de ella. Y falta, en el Estado, la preocupación por esos cuarenta; es decir, la preocupación por la gente.

La asistencia social. En Venezuela hay medio millón de niños abandonados. Y esa cifra se va engrosando con buena parte de los 400.000 niños que nacen por año. Entre estos, además, se registra un índice alarmante (15%) de subnormales, consecuencia de la promiscuidad, de enfermedades hereditarias, de malos embarazos. Un alto número de esos niños, además, es perjudicado en su desarrollo intelectual, por efecto de una deficiente nutrición en el período crítico de la primera niñez. Hay, por otro lado, millares y millares de madres abandonadas. Y ancianos sin hogar ni tra-

bajo. ¿Quién se ocupa, sistemáticamente, de estos temas? ¿Que el Estado no tiene recursos? Sí, los tiene. ¿Que el Estado no tiene gente para trabajar en esto? Sí la tiene. El Estado puede, con la cooperación de los medios de comunicación social, realizar una intensa labor educativa en favor de la planificación familiar. El Estado puede formar brigadas de asistentes sociales destinadas a ilustrar a la gente, censar sus necesidades, detectar dónde es más urgente la acción estatal. Claro, este es un problema íntimamente ligado a otros; básicamente, a la pobreza, al déficit de viviendas. Pero, simultáneamente con la acción que se lleve a cabo contra esos otros problemas, es indispensable una gran movilización nacional para asistir a estos sectores marginales, construir hogares-modelo para niños y ancianos, provocar una transformación cultural que haga ceder hábitos perniciosos y derrumbe los obstáculos que, a la realización personal de tantos venezolanos, le opone la ignorancia, la falta de instrucción y de la desatención del Estado. Creo que todo esto debe ser materia exclusiva de un Ministerio de Bienestar Social, dedicado nada más que a estas tareas, con el apoyo material y moral, sin restricciones, del Poder Ejecutivo.

La salud. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de derechos humanos. Creo que los derechos humanos no se violan sólo donde no hay libertades, sino que también se violan donde el hombre que aporta su trabajo a la sociedad, no tiene garantizada por la misma sociedad —independientemente de su remuneración— la asistencia médica integral de él y su familia. En Venezuela tenemos relativamente pocos hospitales, y la mayoría pésimamente dotados. El seguro social apenas cubre —y no totalmente— el extremo de una hospitalización, pero deja fuera una cantidad innumerable de servicios médicos, indispensables y costosos. Los medicamentos son, en muchos casos, artículos de lujo. También en esto se ha agitado el mito de que el Estado poco puede hacer. A quienes agitan ese mito, les contesto, por ejemplo, con la Maternidad Concep-

ción Palacios, que durante mi Gobernación fue íntegramente remodelada, transformándose de un puesto de socorro indigno y humillante, en una clínica modelo. Se puede construir hospitales. Se puede coordinar con los sindicatos una acción común, destinada a multiplicar los servicios sociales. Se puede acordar con los laboratorios la producción de medicamentos esenciales a bajo costo: cosa perfectamente posible cuando el Estado o los servicios sociales sindicales se convierten en compradores de grandes cantidades, cuando se establecen estímulos fiscales, o cuando, en los casos extremos, se acuerdan subsidios. Todo eso es posible. Pero, para hacerlo realidad, hay que entender que la gente viene primero. Que debemos ocupar nuestra mente y reservar los recursos, para hacer estas cosas antes que otras.

La educación. En los últimos años, ha existido en Venezuela cierta preocupación por la enseñanza superior. Pero la enseñanza primaria y media siguen siendo todavía, las grandes abandonadas. Y es en esos niveles donde se precisa la más enérgica acción del Estado. Claro, si un puesto de maestro es un puesto político; si el sueldo de los maestros no nos preocupa tanto como el de los sectores "productivos", si confiamos en que la escuela privada —reservada, por su costo, para determinados sectores sociales— compense las deficiencias de la escuela pública, nunca vamos a tener una educación a la altura de nuestras necesidades. Para resolver un problema, primero hay que vivirlo como tal. Uno tiene muy pocas posibilidades de solucionar aquello que no le duele. Y a nuestros dirigentes, en general, no les duele el problema de la educación, porque están muy lejos de él, porque no lo conocen. Cuando uno les propone construir nuevas escuelas, elevar las escalas de remuneraciones a los docentes, establecer un sistema de becas internas para los niveles primario y secundario, unificar los textos y utilizar una Imprenta nacional modernizada para la producción de libros y cuadernos de distribución gratuita o fundar un canal de televisión educativa, siem-

pre hay alguien que opone a estas iniciativas otras "prioridades". Eso no sucedería si lo primero fuera la gente. La capacitación, la superación personal, es una necesidad imperiosa que demanda del Estado el mayor y más decidido esfuerzo.

Los servicios públicos. Los políticos hablan de mejorar el transporte y otros servicios públicos. Pero, en el gobierno, suele preocuparles más la construcción de una nueva autopista (por donde no pueden pasar autobuses) que la multiplicación del número de unidades de transporte colectivo. ¿Por qué ha habido, en Venezuela, dinero para hacer autopistas —que en muchísimos casos eran indispensables; no estoy criticando su construcción— pero nunca ha habido suficiente dinero para establecer un sistema eficiente de transporte masivo? Cuando, en la Gobernación del Distrito Federal, me propuse modernizar la flota de autobuses y darle a la gente el servicio digno que merecía, encontré infinidad de resistencias y percibí cómo las reservas mentales (amén de ciertos intereses materiales) se levantaban contra esa política que chocaba contra un sentimiento inconfesado de que el transporte colectivo era un problema secundario. Como lo hice en la Gobernación, le daría a ese problema, en el gobierno nacional, una extraordinaria importancia.

Vamos a dejar este capítulo aquí. Pero propongo que, antes, revisemos todo lo dicho, sobre vivienda, sobre asistencia social, sobre salud, sobre educación, sobre servicios públicos, y volvamos a plantearnos si "primero la gente" es un slogan o es, en cambio, una actitud frente a los problemas del país que, llevada al gobierno, tendría efectos contundentes en el mejoramiento de la calidad de la vida; en la recuperación de la dignidad de todos los ciudadanos; en una nueva orientación del Estado, para consagrarlo no a valores abstractos, sino a resolver los problemas de los seres de carne y hueso que viven, trabajan, crean, en este país nuestro del que queremos estar orgullosos.

Los trabajadores

—¿Qué papel deben jugar, a su juicio, los sindicatos de trabajadores?

—Un papel fundamental. En Venezuela, los sindicatos han funcionado, y funcionan, como apéndices de los partidos políticos. Son, en su mayoría, organizaciones accesorias, cuando no —en el caso de sindicatos que han caído en manos de grupos extremistas— pretendidos instrumentos de agitación.

Los trabajadores necesitan organizaciones profesionales que representen sus intereses de manera eficiente. Hace falta, no ya el antiguo sindicalismo de contradicción, ni tampoco ese sindicalismo subordinado que criticamos. Hace falta un sindicalismo de participación, que sin abandonar las justas reivindicaciones de sus representados, intervenga conscientemente en la toma de decisiones.

Sindicatos independientes de toda facción política, responsables, unificados, que en cada oportunidad sepan reflejar los puntos de vista y el interés de los trabajadores, y que tengan la autoridad suficiente para conciliar, para armonizar esos puntos de vista y ese interés con los de otros sectores sociales, contribuirían grandemente al desarrollo del país y al establecimiento de una paz social estable.

Esa participación sería, además, otra forma de abrir nuestra democracia. Porque la conducción del Estado debe dejar de ser un juego para iniciados, en el que

sólo los políticos profesionales se sientan a la mesa, y el resto es público.

Los distintos sectores sociales —y especialmente los trabajadores, que hasta ahora no han dispuesto del número suficiente de organizaciones sindicales genuinas— deben hallar las formas de participar en las decisiones fundamentales. Así, tales decisiones resultarán legitimadas por un acuerdo social, y la expectativa de cumplimiento será extraordinariamente mayor a la que tienen hoy en día las decisiones gubernamentales.

A menudo, la gente pregunta: ¿por qué las órdenes del gobierno no se cumplen? Creo que por eso mismo: porque son órdenes. Porque no son un acuerdo, un trato; porque no surgen de una voluntad común, expresada luego de una discusión abierta en la que todos los criterios estén expuestos al examen y a la conciliación. Porque falta participación. Porque la representatividad política debe ser complementada por la representatividad social. Y, en ese sentido, los sindicatos tienen una función de suma importancia a desempeñar en una democracia menos ritual y más profunda que ésta.

Los sindicatos, además, pueden —en cooperación con el Estado— realizar una inimitable tarea en el campo del bienestar social. En la medida que dispongan de recursos, ellos pueden hacer mucho en materia de vivienda, de deportes, de turismo social. Nadie mejor que los mismos trabajadores para establecer sus propias necesidades, que a menudo los “expertos” pretenden fijarles de acuerdo con patrones ajenos a sus conceptos y preferencias. Desde todo punto de vista, además, es deseable que la omnipotencia del Estado, y la actitud de beneficencia que a menudo éste exhibe, sean sustituidas por mecanismos relativamente autónomos, capaces de hallar soluciones efectivas a los problemas de la gente, sobre la base de criterios y esfuerzos propios.

Por lo demás, casi todo esto es válido a cualquiera organización de ciudadanos: toda institución represen-

tativa merece, de la sociedad y el Estado, el reconocimiento de su derecho a participar plenamente en la construcción del destino común.

Las ciudades

—Usted ha demostrado siempre preocupación por los problemas urbanos. ¿Cuál es su visión del campo?

—La ciudad resume, en un país como el nuestro, todos los problemas de una estructura económica desequilibrada. Mi preocupación por la ciudad no podría estar nunca divorciada de una profunda preocupación por el campo.

Examinemos los problemas urbanos: el hacinamiento, por ejemplo. El dramático problema de los ranchos, que en Caracas los tenemos ahí a la vista, en los cerros, golpeteando diariamente nuestra conciencia. Eso es resultado de los desestímulos del campo; de la falta de posibilidades de progreso y esparcimiento que sufre el hombre de provincia, quien se siente así empujado a la ciudad. Vivir mal en un cerro de Caracas es vivir mejor que en zonas abandonadas del interior. Y entonces, los cerros se cubren de ranchos. Esto no es un problema de la ciudad. Es un síntoma de la enfermedad que aqueja a todo un país que no ha logrado integrarse, que tiene un gran desbalance entre campo y ciudad, que ha subestimado la economía rural.

Esa era mi frustración, como Gobernador de Caracas. Me propuse hacer muchas cosas por la ciudad, y sería insincero si no dijera que creo haber hecho mucho más de lo que originalmente creí posible. Después de tres años de acción, sentí que había cumplido mi deber. En materia de vivienda, de transportes, de aseo urbano, de salud pública, de cultura, de protección a

la comunidad, de recreación popular, mi gobierno realizó una obra que sus responsables reivindicamos con orgullo. Sin embargo, constantemente nos enfrentábamos a la evidencia de que estábamos manejando problemas nacionales y disponíamos sólo de remedios municipales. Los límites del Distrito Federal eran nuestros propios límites. Mejorábamos la calidad de la vida en Caracas y la transformábamos en una opción aún más atractiva para el hombre del interior, con lo que involuntariamente fomentábamos la migración hacia una ciudad superpoblada. Poníamos en marcha soluciones efectivas a los problemas caraqueños, y nos topábamos con los obstáculos de una economía nacional que tenía, inclusive, dificultades para abastecernos adecuadamente de todo cuanto necesitábamos para llevar adelante nuestras obras.

Por eso, la ciudad es, sí, una gran preocupación mía; pero no auspicio soluciones restringidas. Mi propuesta no es una propuesta urbana, sino nacional.

Las mujeres

—¿Por qué cree usted que las mujeres, en Venezuela, tienen todavía una insuficiente participación en la política activa?

—Porque, aun inconscientemente —y a veces de forma consciente— se las discrimina. Los viejos partidos políticos, y sobre todo sus dirigentes, no han podido quitarse de encima los preconceptos propios de aquella época en que ellos alcanzaron auge. Arrastran —aunque a veces los maquillen con retórica— los criterios de los años 30.

Hay veces que esto pasa inadvertido porque se ve algunas mujeres actuando. Sin embargo, creo que, cuando se hace una lista de candidatos y se incluye a una mujer por el hecho de serlo, se está discriminando a las mujeres. Se les está concediendo el derecho a tener una "representante". La discriminación cesará el día en que las listas o los nombramientos se hagan en función de las aptitudes de cada uno y sin reparar en el sexo del elegido.

Las propias mujeres, a menudo, pasan por alto este hecho. Cuando organizan, dentro de un partido, la rama femenina, no advierten que están autorrecluyéndose, marginándose. Cuando se dan su propio *status*, están reconociendo que son algo "distinto", y lo que es distinto no es igual. . .

Esto es muy difícil de entender para hombres de otras generaciones que, por razón de su oficio —como ocurre con los políticos—, han ido reafirmando

la supremacía del hombre, en ese antiguo esquema que no le concede a la mujer otro horizonte que el del hogar.

Las nuevas generaciones, por cierto, traen una visión distinta. Los jóvenes no piensan en términos de sexo cuando analizan los problemas, las necesidades y los anhelos del país. Entre los jóvenes no se discute la necesidad de reformar la legislación civil para conceder a la mujer iguales derechos y acabar con la sumisión a la que jurídicamente la somete un Código que repite normas redactadas por Napoleón Bonaparte en la Francia del siglo XIX. Entre los jóvenes, la igualdad se da en los hechos, y ellos aspiran a que esa igualdad se transmita a toda la sociedad.

La plena integración de la mujer es, por lo tanto, una deuda que la sociedad tiene con las mujeres y con las jóvenes generaciones. Asegurar esa integración es reconocer un derecho que no admite discusiones. Y es, además, un beneficio para la propia sociedad: Venezuela no puede seguir privándose de la imaginación, el sentido común, la sensibilidad de tantas mujeres a las que criterios anacrónicos e injustos mantienen fuera de los centros de poder, marginadas o limitadas en su acción.

Estoy convencido y mi experiencia me ha demostrado que muchos de los aspectos negativos de nuestra Administración pública, de nuestro sistema educacional, de la asistencia hospitalaria y de la conducción económica y social en términos generales, sufrirían una transformación si inyectáramos, en los niveles de decisiones, el talento, la intuición, la tenacidad, la preocupación por el detalle, el amor y la voluntad de esas miles de mujeres que ahora están obligadas a ser espectadoras, teniendo las mejores aptitudes para ser protagonistas.

La irrupción de la mujer, en el gobierno, en los partidos, y en todos los focos de poder; su presencia masiva en esos ámbitos, adonde ahora sólo acceden unas pocas, utilizadas como "muestra" o "prueba" de

que no hay discriminación, llegará al poder no sólo la capacidad de la mujer y sus enormes deseos de realización —sistemáticamente frustrados durante tantos años— sino el espíritu de las nuevas generaciones; una concepción distinta de la vida y de la sociedad, libre de prejuicios sexuales, imbuida de la noción de igualdad y dispuesta a no tener, para clasificar a los seres humanos, otro criterio que el de su capacidad y su voluntad de servir.

Los nacionalizados

—¿A qué se debe su insistente preocupación por los nacionalizados? ¿Cree que es lo mismo haber nacido en esta tierra, haberse criado aquí, tener enterrados aquí a los propios muertos, que haberse hecho venezolano mediante un trámite en Extranjería?

—Para mí, lo que cuenta es el amor a Venezuela; y haber nacido en un país no es condición necesaria y a veces ni siquiera condición suficiente para amarlo. Creo que la inmensa mayoría de los venezolanos ama su tierra, sus costumbres, sus tradiciones. Pero hay, también, quienes nacieron aquí, un día se fueron y no volvieron más; y están, como contrapartida, los que vinieron de otras partes a echar raíces. Tomemos, del arte popular, un ejemplo más que elocuente: ¿Quién se atrevería a negarle venezolanidad a Billo Frómata, por ejemplo? Claro que es importante saber que uno pertenece a esta tierra desde su nacimiento. Pero también es importante haber elegido esta tierra. Muchos nacionalizados podrían decirnos a nosotros que, a diferencia de ellos, nosotros no elegimos Venezuela. ¿Cómo vamos a negarles a ellos su plena integración a nosotros? ¿Con qué derecho y con qué propósito estableceríamos que los venezolanos nacidos en el extranjero son ciudadanos de segunda? Yo creo que todos los venezolanos somos de primera.

A menudo, las prevenciones respecto de los naturalizados, y de los extranjeros en general esconden un complejo. La Venezuela del futuro no puede ser un país acomplejado.

¿Habría sido inteligente, de parte de los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, rechazar por intruso a aquel hijo de Caracas que salió a pelear por la libertad en otros dominios? ¿Habría sido inteligente que los franceses y los norteamericanos se hubiesen privado de la tenacidad de Francisco de Miranda?

Cuando entendamos que lo importante es Venezuela, abandonaremos ese criterio de policía de fronteras que algunos venezolanos tienen para juzgar el patriotismo.

En los Estados Unidos, donde el interés nacional se antepone a cualquier prejuicio, las universidades están repletas de extranjeros. Cuando llevaron a Einstein a Princeton, a nadie se le ocurrió decir: ¿por qué tenemos que importar un físico alemán teniendo nosotros tan buenos físicos? Del mismo modo, y tratándose de algo mucho más delicado que la docencia, a ningún norteamericano se le ocurrió decir que no se le podía confiar la carrera espacial a Von Braun, o que era inadmisibles entregar el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería de los Estados Unidos, a un hombre como Kissinger, que ni siquiera pronunciaba bien el inglés. Y hoy en día, el sucesor del alemán Kissinger, no en el Departamento de Estado, pero sí como principal consejero de la Casa Blanca en materia de política exterior, es un polaco: Zbigniew Brzezinski. Para los norteamericanos, no importa dónde se haya nacido, con tal de que trabaje para los Estados Unidos, y nadie puede, a la luz de los resultados, sostener que es un criterio errado.

Propongo que sigamos el ejemplo e incorporemos sin complejos a todos quienes vienen a sumarnos su talento y su capacidad de trabajo. Para hacerle bien a Venezuela, que es lo que importa, no es imprescindible haber nacido dentro de los límites del Territorio Nacional.

Quienes aquí nacimos, justo es que recordemos que somos también, en alguna medida, tierra de inmigrantes.

Difícilmente se encontraría un venezolano cuya sangre no sea suma de sangres distintas, cuyo color no conjugue soles de diferentes geografías.

La mayoría somos descendientes próximos o remotos de inmigrantes. Yo soy nieto de uno de ellos, que dejó su luminosa tierra latina para llegar a Venezuela a través de la ancha puerta del Orinoco, persiguiendo la ilusión de un mundo nuevo asentado, proféticamente, en Ciudad Bolívar.

El petróleo

—El petróleo es una riqueza no renovable. ¿No cree usted que es necesario evitar su explotación desmedida?

—En Venezuela se ha hecho un lugar común hablar de la necesidad de explotar “racionalmente” el petróleo. Nadie puede estar en contra de actitudes racionales, pero conviene preguntarse: ¿qué entienden, quienes la propician, por explotación “racional”?

Si hemos de emplear la razón, debemos tener en cuenta el siguiente panorama: es cierto que el petróleo convencional va a acabárenos hacia fin de siglo, pero es casi seguro que —al ritmo del avance tecnológico de la época, y habida cuenta de las necesidades que tienen los países centrales— el petróleo dejará de tener, antes del siglo XXI, la importancia que tiene actualmente. La luz solar, las mareas, los vientos, eventuales combustibles cósmicos, sustituirán al petróleo como fuente de energía. Los automóviles que quemaban combustibles serán reemplazados por otros que obtendrán la fuerza motriz de baterías recargables. Y esto es sólo el futuro que podemos fácilmente predecir.

A veces nos olvidamos que estamos viviendo en el siglo XX. Decimos: “dentro de veinte años se nos acabará el petróleo”, y no somos capaces de imaginar que, para entonces, el mundo será distinto en más de un aspecto. Pero miremos un poco hacia atrás: hace 20 años, el Hombre aún no había salido de la atmósfera, y los viajes espaciales seguían pareciendo un sueño.

Hoy en día, recordamos el descenso del hombre en la Luna y tenemos la sensación de que es algo viejo, que pasó hace ya mucho tiempo y que, en última instancia, no es asombroso. Nos parece natural recibir una transmisión de TV vía satélite, o viajar en aviones que superan la velocidad del sonido; y hace veinte años, ni siquiera pensábamos en eso.

¿Quién puede creer que el año 2000 será igual a 1978? ¿Quién tiene tan poca imaginación para suponer que, en el siglo XXI, todavía andarán los países industriales persiguiendo a la OPEP para que congele los precios?

El petróleo es importante hoy, porque aún no tiene sustitutos suficientes y, en la medida que resulta imprescindible, su valor es alto. Explotarlo en este momento, convertirlo en capital y usar ese capital para desarrollar una estructura productiva diversificada y relativamente autónoma, ¿no es racional?

Por cierto, nadie puede estar a favor de explotaciones que subvierten a la ecología y a la economía. No se trata de sacar petróleo históricamente. Pero, un exceso de prudencia, ¿no podría ser igualmente irracional? Reducir nuestras utilidades presentes —limitando así nuestro desarrollo—, para tener todavía petróleo en la época de las usinas solares y los carros atómicos, no parece un buen negocio.

Si cambiamos petróleo por el Guri, por plantas siderúrgicas, por el hierro de Cerro Bolívar y la bauxita de Los Pijiguaos, ¿no estamos usando racionalmente nuestra riqueza? Si cambiamos petróleo por bienestar y cultura en la población, ¿no estamos ensanchando el mercado interno —base de todo proceso de desarrollo firme— y mejorando los recursos humanos con lo que hemos de afrontar un futuro más tecnificado y complejo? ¿No es eso mucho más racional que la avaricia petrolera?

Creo que donde más falta hace la racionalidad, no es en los pozos de petróleo. Donde más se la necesitará, en el futuro inmediato, es en los centros de decisión. Allí donde se resuelve el destino de las ganan-

cias que el petróleo nos deja. Porque, más racional que poner un pie sobre el pozo para que el petróleo se "conserva", será poner el ojo en los grandes planes, para asegurar que cada petrodólar se convierta en un instrumento de desarrollo y no en valor de cambio para importar lujos ociosos. Para asegurarnos que la riqueza de Venezuela se transforme en bienestar para su gente.

La Venezuela postpetrolera

—¿Cómo ve usted a la Venezuela postpetrolera?

—Creo que esa Venezuela tiene su sede en Guayana. Es en esa región donde se concentran las riquezas que más decididamente contribuirán a quebrar nuestra excesiva dependencia respecto del petróleo.

La moderna teoría económica reconoce que —dadas las diferencias en riquezas, topografía y demás factores que distinguen a unas regiones de otras— el desarrollo de un país no se da de manera uniforme en todo su territorio. Hay, por el contrario, polos de desarrollo. Esos polos concentran recursos y esfuerzos, y el mérito de la planificación nacional debe ser el de lograr que los efectos de ese desarrollo sí sean uniformes para todo el país.

En Venezuela, es obvio que —así como el Zulia fue, y sigue siendo, nuestra principal fuente de recursos financieros— la economía postpetrolera, mucho más compleja y diversificada que la actual, se sustentará en los recursos de Guayana.

Allí, están los torrentes del Orinoco y el Caroní, con su apabullante potencial eléctrico, que la represa Raúl Leoni —con todo y con lo que será la segunda más grande del mundo— sólo aprovechará en parte. Allí está, también, el Cerro Bolívar, con sus extraordinarias reservas de hierro, alimento de la industria siderúrgica. Allí, asimismo, están los riquísimos yaci-

mientos de bauxita de Los Pijiguaos, que abastecerán a la industria del aluminio. Y allí, por último, está —esperando que el desarrollo tecnológico o la economía internacional tornen rentable su explotación— la faja petrolífera del Orinoco.

Con energía eléctrica, hierro y acero, bauxita y aluminio, petróleo y una planificación adecuada, Guayana está, efectivamente, llamada a ser la sede de esa economía postpetrolera, cuyo desarrollo beneficiará por igual a los habitantes de todas las regiones del país. Esa economía postpetrolera, además, estará caracterizada por la especialización, y así cada una de las regiones del país tendrá una función específica en la tarea común de producir la riqueza.

Por cierto, habrá polos de desarrollo industrial, y polos de desarrollo agrícola, distribuidos en el territorio nacional, donde la población habrá aumentado en número, en poder adquisitivo medio y en aspiraciones. Todo el cinturón costero multiplicará su poderío industrial. Los Llanos, los Andes y el sur del Lago de Maracaibo serán polos de desarrollo agropecuario. Y por toda nuestra geografía habrá diversos centros de producción.

Hoy en día se acepta que la autosuficiencia es una utopía en cualquier país del mundo. Pretender que produzcamos todo lo que consumimos es desconocer los límites naturales y económicos del desarrollo, y exigir que consumamos sólo lo que producimos es ahogar nuestras posibilidades de desarrollar una economía moderna y eficiente.

Ahora bien, si la autosuficiencia es un objetivo imposible, la reducción de nuestra dependencia —tanto en el aspecto industrial como en el agropecuario— hasta el límite que no podamos trascender en virtud de carencias naturales o la falta de recursos disponibles, es una necesidad imperiosa. Debemos, en efecto, explotar al máximo nuestras riquezas y emplear toda nuestra capacidad productiva, para hacer nuestra eco-

nomía más diversificada, menos dependiente; mucho más compleja, estable y eficiente; mucho menos vulnerable y, por sobre todo, más apta para satisfacer las necesidades de la gente.

La urgencia de los cambios

—¿Cómo se explica que, teniendo tantos recursos, Venezuela no progrese más rápidamente?

—Nuestro país, sin duda, tiene que ir más rápido. Pero no va a ser la simple suma de recursos monetarios lo que aumentaría la velocidad de su crecimiento.

A menudo, los teóricos del desarrollo reducen todo el problema a la escasez de capital. Sin embargo, la cuestión no es tan simple. El mismo atraso es, a su vez, causante de muchas debilidades. Los países subdesarrollados tienen grandes déficits, no sólo de recursos monetarios, sino de recursos humanos debidamente capacitados, de tecnología y de tradición económica.

¿Cómo transformar a una sociedad, habituada a vivir de la agricultura y de las industrias extractivas, en una moderna sociedad industrial? ¿Cómo evitar que la bonanza se esterilice por las vías del hiperconsumo, en un país que tiende a imitar los patrones de consumo de los países centrales? ¿Cómo hacer, sin vulnerar los principios de la libre iniciativa, para que el Estado canalice estos nuevos recursos hacia el establecimiento de una estructura productiva equilibrada? ¿Cómo adquirir las técnicas, los hábitos y la disciplina que se necesitan para multiplicar los recursos de que disponemos? ¿Cómo superar, velozmente, nuestras carencias de infraestructura?

La revalorización del petróleo, en 1973, nos ha enseñado, a los venezolanos, que el desarrollo no es sólo problema de capitales. De pronto, nos encontramos

con recursos para importar los equipos más sofisticados, pero a poco andar descubrimos que todo se hacía difícil: desde recibir esos equipos —porque nuestros puertos, diseñados para una capacidad nacional de compra mucho menor, empezaron a atascarse de buques— hasta operarlos eficientemente, porque nos faltaba personal especializado.

Para superar todo eso, es necesario, por un lado planificación; y, por otro lado, crear una mística de desarrollo. Movilizar a los venezolanos, hacerles comprender que están sometidos a un reto, incentivar la imaginación colectiva y comprometer la voluntad de trabajo nacional.

Ya sabemos que el dinero no basta. Ya sabemos que el petróleo se nos puede evaporar en veinte años y que, antes, se nos pueden evaporar los recursos monetarios que la revalorización del petróleo nos ha proporcionado. Ya sabemos que es necesario edificar desde ahora la Venezuela postpetrolera.

A partir de esas convicciones, ¿cuáles son los pasos que debemos dar y cuáles nuestras necesidades más perentorias? Lo primero, es sembrar estas inquietudes. Los debates parroquiales, entre viejos políticos que pierden el tiempo discutiendo cosas intrascendentes, nos han distraído de estas cuestiones fundamentales. Por eso Venezuela no anda tan rápido como debería y como, estoy seguro, lo hará a través de una concepción más activa y enérgica de gobernar.

Los temores

—¿Cuáles son sus principales temores?

—No, no tengo temores. Creo que eso —despojarse de los miedos, ahuyentar los fantasmas que acorralan nuestra imaginación— es la primera necesidad que tenemos los venezolanos.

A través de mi intensa experiencia como funcionario público, he podido comprobar cómo los miedos refrenan a la mayoría de nuestros dirigentes.

Miedo a los Estados Unidos.

Miedo de subir a los cerros.

Miedo de entrar en la Universidad.

Miedo a las reformas.

Miedo a los medios de comunicación social.

Miedo a la izquierda.

Miedo a las Fuerzas Armadas.

Yo he conocido los Estados Unidos por dentro, he subido —como hombre común, y como Gobernador— mil veces a los cerros, he entrado a las Universidades, he emprendido reformas y he tratado continuamente con los medios de comunicación social, con militares y con civiles de todas las ideologías. Sin inhibiciones. Sin temores. Y creo firmemente que, en Venezuela, no existen barreras infranqueables ni fuerzas con las

cuales no se pueda entablar el diálogo. Creo, asimismo, que la situación internacional de nuestros días, tan distinta de la de cualquier época pasada, permite ejercer la autonomía sin miedo.

Si hay algo a lo que debemos temerle, es a nuestros propios temores. A las fronteras que levanta nuestra imaginación. A los resabios que, en el espíritu nacional, dejaron los largos años de terror oficial.

La juventud, que no tiene esos resabios, y que siente el estímulo de una realidad mundial caracterizada por los cambios permanentes y el diálogo, está felizmente liberada de temores. Me identifico con su actitud frente a los problemas. Creo que es necesario arrinconar los temores, encerrar a los fantasmas, y convocar a la imaginación para construir la Venezuela que ambicionamos: una Venezuela con sentido de grandeza, plenamente realizada, donde primero sea la gente.

INDICE

Antes de empezar	5
Introducción. El reto	7
Primero la gente	9
El denominador común	13
La política	17
Los partidos	21
Las maquinarias	25
La opinión pública	29
Los medios de comunicación social	33
La escala de valores	37
La corrupción	39
La delincuencia	43
Los jóvenes	45
Una posición de centro	49
La nueva dimensión de Venezuela	53
Estados Unidos	57
Los países emergentes	61
América Latina	63
El desarrollo armónico	67

Los empresarios	69
El Estado	73
Las Fuerzas Armadas	75
La redistribución del ingreso	79
La calidad de la vida	83
Los problemas de la familia	87
Los trabajadores	95
Las ciudades	99
Las mujeres	101
Los nacionalizados	105
El petróleo	109
La Venezuela postpetrolera	113
La urgencia de los cambios	117
Los temores	119

“Si dejamos que el siglo XXI nos sorprenda, si no nos ponemos a pensar y decidir ya qué país queremos, si no planificamos, si no medimos los efectos futuros de nuestras decisiones actuales, corremos el serio riesgo de perderlo todo: la oportunidad, los recursos y la libertad”.